

nes de pesos (\$ 120.000.000), que se distribuirán de la siguiente manera;

1. Treinta y siete millones de pesos (pesos 37.000.000), política salarial del decreto 1.610/93.
2. Cuarenta y ocho millones de pesos (pesos 48.000.000), política educativa universitaria.
3. Treinta y cinco millones de pesos (pesos 35.000.000), fondo de inversión, infraestructura y reequipamiento universitario nacional.

Quedan excluidas del primer párrafo las partidas correspondientes a los programas de mejoramiento de la calidad educativa, plan social educativo e implementación de la Ley Federal de Educación;

- d) Ex Fondo de Desarrollo Regional (FDR) por un monto de diez millones de pesos (pesos 10.000.000).

Art. 46. — Incorpórase a la ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto, texto ordenado en 1993) el artículo 35 de la ley 24.190 y los artículos 11, 12, 13, 15, 16, 27 y 32 de la presente ley.

## CAPÍTULO II

### *Presupuesto de la administración central*

Art. 47. — Detállanse en las planillas resumen números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 anexas al presente artículo,

los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley, y las plantas de personal correspondientes a las distintas jurisdicciones de la administración central, en la planilla número 9 anexa.

## CAPÍTULO III

### *Presupuesto de organismos descentralizados e instituciones de seguridad social*

Art. 48. — Detállanse en las planillas resumen números: 1 "A", 2 "A", 3 "A", 4 "A", 5 "A", 6 "A", 7 "A" y 8 "A", anexas al presente artículo los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley, y las plantas de personal correspondientes a cada uno de los organismos descentralizados, en la planilla número 9 "A" anexa.

Art. 49. — Detállanse en las planillas resumen números: 1 "B", 2 "B", 3 "B", 4 "B", 5 "B", 6 "B" y 8 "B" anexas al presente artículo los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley, y las plantas de personal correspondientes a cada una de las instituciones de seguridad social, en la planilla número 9 "B" anexa.

Art. 50. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a realizar todas las modificaciones y reestructuración de planillas a cuadros anexos que fueron modificados por incorporaciones de artículos o corrección de partidas.

Art. 51. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

## B. INSERCIONES

### 1

### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ESTEVEZ BOERO

Ampliación de la exposición del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 1994.

#### 1. INTRODUCCION

1. El 14 de septiembre de 1993 el ministro de Economía presentó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de ley del presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 1994.

De esta forma se dio cumplimiento al artículo 26 de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, que establece que el Poder Ejecutivo nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto antes del 15 de septiembre del año anterior.

Por lo tanto los proyectos de presupuestos de los ejercicios 1992, 1993 y 1994 han sido presentados dentro de los plazos legales establecidos para ello.

2. Los elementos positivos de la presentación en término se relativizan por dos actitudes del Poder Ejecutivo nacional que calificamos como negativas:

a) La mora en la elevación al Congreso de la Nación de la Cuenta de Inversión, que contiene a las respectivas

ejecuciones presupuestarias, y que el artículo 95 de la ley 24.156 establece debe ser presentada antes del 30 de junio del año siguiente.

A la fecha aún no ha sido elevada al Congreso la documentación correspondiente a los ejercicios 1991 y 1992.

Esta mora imposibilita el cotejo entre lo presupuestado y lo real ocurrido, por lo que convierte a la discusión del presupuesto y la comparación con otros presupuestos anteriores en un ejercicio con más de teórico (comparación de supuestos) que de real (cotejo de presupuestos con hechos);

b) Las prácticas inconstitucionales del veto parcial y del dictado de decretos de necesidad y urgencia, mediante las cuales el Poder Ejecutivo asume la tarea legislativa que es competencia del Honorable Congreso de la Nación.

Así es como se introducen cambios en la legislación impositiva que modifican ingresos fiscales y la asignación de dichos ingresos, distorsionando la voluntad del Poder Legislativo plasmada al aprobar la Ley de Presupuesto.

El veto parcial opera en el mismo sentido, y como ejemplo vemos que el inciso c) del artículo 15 de la ley 24.144, que determinaba que el presupuesto del Banco

Central de la República Argentina debía ser remitido al Congreso para su aprobación, fue vetado a efectos de quitarle esa función al Parlamento.

3. El presupuesto nacional, al que Juan B. Justo denominaba "la ley de las leyes", permite que sea el Parlamento Nacional el que decide sobre los ingresos y egresos del Estado nacional.

Afectando a esta atribución se insiste incorporando el artículo 59 en el proyecto que faculta al Poder Ejecutivo nacional a incrementar los créditos presupuestarios (que la ley 24.156 en su artículo 28 establece "constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar") en la medida en que se aumenten en igual monto los recursos genuinos y fuentes de financiamiento.

Asimismo el artículo 69 (antes artículo 79) faculta al Poder Ejecutivo a modificar las partidas presupuestarias. Esto significa que una partida que está asignada para algo pueda ser utilizada para otra cosa si el Poder Ejecutivo así lo dispone. A esta facultad se le imponen dos condicionamientos:

a) No puede transferir créditos de una finalidad a otra, de las cinco finalidades que se especifican en el artículo 19 (administración gubernamental; servicios de defensa y seguridad; servicios sociales; servicios económicos; servicios de la deuda pública), y

b) No puede transferir gastos de capital y de aplicación financiera a gastos corrientes, pero no se especifica la imposibilidad de la transferencia contraria, esto es que se podrían transferir créditos de gastos corrientes a gastos de capital y de aplicaciones financieras.

Se concede al Poder Ejecutivo una importante facultad al otorgarle una excepción a estas dos limitaciones y permitirle efectuar modificaciones sobre los créditos de las jurisdicciones 90 (servicio de la deuda pública) y 91 (obligaciones a cargo del Tesoro).

La jurisdicción 90 (páginas 4.590 a 4.596) comprende 2.936 millones de pesos para atender los servicios de la deuda pública directa e indirecta de la administración central.

La jurisdicción 91 (páginas 4.597 a 4.599) comprende 3.665 millones de pesos de obligaciones del Tesoro nacional destinadas a financiar programas presupuestarios bajo responsabilidad de entes ajenos a la administración nacional. Se incluyen aquí aquellas sumas que, por ley, se encuentran con asignaciones específicas, por ejemplo: desarrollo educativo (Ley de Impuesto a los Activos), infraestructura básica social (Ley del Impuesto a las Ganancias), FONAVI, coparticipación vial. Se trata de importantes transferencias a las provincias y estos créditos no deberían ser objeto de modificaciones discrecionales por parte del Poder Ejecutivo nacional.

4. El artículo 14 plantea facultar al Ministerio de Economía para que establezca los procedimientos de liquidación de deudas de entes, organismos y sociedades del Estado, que carezcan de documentación respaldatoria indispensable para confeccionar las liquidaciones.

Pensamos que la autorización tal como está planteada es muy amplia y debería acotarse en dos sentidos:

a) Que en todos los casos debe existir un dictamen de la Secretaría de Ingresos Públicos que garantice que

los beneficiarios de los pagos no sean a su vez deudores del sistema impositivo o del sistema previsional, y

b) Que para deudas superiores a determinados importes, por ejemplo \$ 500.000, debe incorporarse explícitamente en el presupuesto 1994 —o siguientes— mediante su tratamiento por el Congreso de la Nación.

5. El artículo 16 establece que la documentación financiera de la administración nacional podrá ser reemplazada por caracteres magnéticos luego del cumplimiento del plazo de 6 meses de su tramitación.

Pensamos que seis meses es poco tiempo y que el plazo debería ser de 12 meses luego de finalizado el ejercicio a que corresponde. De esta manera el plazo de conservar la documentación original sería de un máximo de 24 meses (documentación de enero) a un mínimo de 12 meses (documentación de diciembre), que estimamos prudencial para su conservación.

6. El artículo 29 establece la ratificación parlamentaria de 19 decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo nacional, haciendo uso de una autoatribución indebida de aspectos que son de exclusivo tratamiento por parte del Congreso de la Nación.

Estimamos que es inconveniente la aprobación de este artículo porque se estaría validando, no sólo la normativa contenida en dichos decretos, sino la práctica antidemocrática y corrosiva de las instituciones de la Constitución Nacional, de avanzar con hechos consumados sobre aspectos que el Congreso no aprueba, poner en ejecución las medidas y, luego de algunos años, plantear en un perdido artículo de una ley más amplia, la ratificación parlamentaria.

7. El presupuesto para 1994 fija en \$ 39.980 millones el monto del gasto de la administración nacional (administración central + organismos descentralizados + seguridad social) y determina un resultado financiero equilibrado, o sea que los ingresos cubrían a los egresos.

Respecto de los nuevos artículos incorporados en el dictamen de la comisión se intenta ratificar el Pacto Federal del 12 de agosto de 1993, el que consideramos, dada la oposición al mismo de varias provincias que no lo firmaron por evaluarlo perjudicial, necesita un tratamiento particular por separado del tratamiento del presupuesto.

Asimismo no encontramos justificada la autorización que se pretende para incrementar en 258,1 millones de pesos las retenciones a las provincias de los fondos de coparticipación con motivo del artículo 14 de la ley 24.049, ni la ratificación pretendida de las retenciones y aplicaciones de fondos realizadas por el Poder Ejecutivo en dicho concepto durante los años 1992 y 1993. Más teniendo en cuenta que el ejercicio 1993 aún no ha finalizado y se está otorgando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para la disposición y aplicación de sumas de las provincias.

8. *El marco macroeconómico.* El presupuesto debe ser considerado dentro del marco de la situación económica del país y su probable evolución durante el período. En este sentido plantea:

— La economía seguirá creciendo y continuarán mejorando las condiciones de vida de la población.

— Se viene dando un notable aumento de la inversión reproductiva.

— Continuarán el equilibrio fiscal, la convertibilidad y el tipo de cambio.

— En 1994 el producto bruto interno crecerá un 6,5 % llegando a 285.314 millones de pesos.

— La inversión llegará al 19 % del producto bruto interno.

— Los índices de precios se alinearán con los de las economías desarrolladas y el índice combinado (mayoristas y minoristas) crecerá en un 4 %.

— Se expandirán las exportaciones gracias a una mayor competitividad de la economía.

— El consumo, luego de una etapa de fuerte recuperación, tenderá a crecer a una tasa más moderada (4,7 %), ubicándose en un 81 % del producto bruto interno.

— Continuará la gran afluencia de capitales extranjeros y la repatriación de capitales domésticos.

— El crecimiento del ahorro nacional hará decrecer la participación del ahorro externo en el financiamiento de la inversión.

— El crecimiento del producto bruto interno hace que crezca la demanda de empleo. Las mejores oportunidades de empleo hacen que trabajadores potenciales se vuelquen masivamente al mercado de trabajo. La sanción de una nueva legislación laboral permitirá crear nuevos empleos. En 1994 caerán las tasas de desocupación y subocupación.

— En 1994 el crecimiento de las exportaciones será proporcionalmente superior al de las importaciones, por lo que se reducirá el déficit de la balanza de bienes y servicios.

9. *Comentarios sobre el marco macroeconómico expuesto.* Existe continuidad en los argumentos planteados por el Poder Ejecutivo respecto de la marcha de la economía; se señalan algunos aspectos con carácter laudatorio (estabilidad, crecimiento) y se fuerza la interpretación de otros (desocupación, déficit del comercio exterior, retraso del tipo de cambio, carácter de la inversión).

Estimamos necesario plantear algunas consideraciones:

#### *Crecimiento y producción industrial*

— El crecimiento de la producción industrial, remarcado en las publicaciones oficiales, y que podemos situar en 11,9 % en 1991, 7,3 % en 1992 y 5 % en 1993, presenta tres aspectos preocupantes:

a) Hay sectores que han crecido en forma sostenida (maquinaria y equipos, cemento y químicos), pero

otros sectores se encuentran en crisis y hay muchas empresas con serias dificultades (juguetes, petroquímica, papel, siderurgia, textil).

b) Aunque las formas de cuantificarlo difieren en sus metodologías y en sus resultados, el poder adquisitivo del salario en la economía se ubica en un 66 % del de 1984 (Carta Económica, octubre de 1993). La lectura de la serie nos indica que no existe una recuperación del salario en consonancia con el crecimiento del PBI y menos aún con el del índice de producción industrial.

c) El crecimiento del producto manufacturero, en importantes sectores industriales, provoca una disminución en el empleo. Una encuesta sobre las 698 empresas industriales más importantes revela que, a pesar del aumento de la producción, en 1991 y 1992 el número de trabajadores disminuyó un 8,4 %. No sólo están reduciendo personal las ramas castigadas por el plan sino también muchas de las que han incrementado su nivel de actividad.

Las industrias están en un proceso de disminución de costos y el alza de los costos laborales en dólares —producto del retraso cambiario— estimula el uso más intensivo del capital, lo que a su vez se encuentra potenciado por el proceso tecnológico cada vez más ahorrador de empleo.

#### *Desempleo y subempleo*

— El desempleo alcanza en mayo de 1993 el récord histórico del 9,9 % de la población económicamente activa. A su vez la tasa de subocupación alcanza al 8,8 % —solo superada en 1988 y en 1990—. Sumadas ambas tasas llegan al 18,7 % que es el más alto de la serie histórica. El ministro de Economía dice que la tasa de desempleo crece porque se mide relacionando la población ocupada con la población económicamente activa, y que esta última se ha visto incrementada porque la gente quiere trabajar porque hay mejores condiciones laborales. Esto no es así, existe necesidad de trabajar porque los ingresos familiares son insuficientes, los salarios son bajos y conseguir un empleo es difícil. El empleo y los salarios son dos de las variables de ajuste que utiliza este plan económico.

#### *Sector externo*

— El comercio exterior registra un déficit de 1.571 millones de dólares a agosto de 1993, calculándose que para todo el año será de unos 2.800/3.000 millones de dólares negativo. Las proyecciones planteadas por el Ministerio de Economía en el presupuesto de 1993 eran de un superávit de 300 millones de dólares.

Se repite de esta forma lo sucedido durante 1992 cuando se había previsto en el presupuesto que el saldo sería positivo en 4.000 millones de dólares y resultó negativo en 2.639 millones de dólares.

En 1992 el error de estimación fue de 6.639 millones de dólares, y en 1993 será de unos 3.300 millones de dólares.

Para 1994 el presupuesto plantea un déficit comercial externo de 1.815 millones de dólares, cuando las estimaciones más serias lo sitúan en 3.000 millones de dólares.

La lectura de la "proyección de balanza de pagos 1994" que obra a fojas 3.910 del proyecto de ley de presupuesto para 1994 nos indica que existe una subestimación del déficit comercial del orden de los 1.200 millones de dólares; que los servicios reales —influidos por una extraña partida de exportaciones por 3.278 millones— se encontrarían subvaluados en unos 900 millones de dólares; y que los servicios financieros —influidos por otra extraña partida de intereses ganados por 2.615 millones— presentan una subvaluación del orden de los 2.800 millones de dólares.

Todo esto significa que para las cuentas oficiales presentadas al Parlamento el saldo de la cuenta corriente externa (mercaderías + servicios reales y financieros) para 1994 será negativo en 5.037 millones de dólares, mientras que para una de las estimaciones más creíbles (Carta Económica) será negativo en 9.878 millones de dólares. La diferencia es abismal, 4.841 millones, un 96 % más de lo presupuestado.

La experiencia de lo ocurrido con los presupuestos de 1992 y 1993 no deja lugar a dudas que el ministro de Economía opta por presentar ante el Parlamento cifras que no están de acuerdo con la realidad, y que se presentan al solo efecto de cumplir con las formas.

El retraso del tipo de cambio —que los funcionarios oficiales llaman fortalecimiento del peso— y las modificaciones arancelarias de la apertura, provocan el retraso de las exportaciones y el incremento de las importaciones. La brecha, hasta ahora, se ha cubierto con una muy importante corriente de capitales del exterior, del orden de los 9.300 millones de dólares en 1992 según CEPAL, y las estimaciones oficiales plantean que este proceso continuará.

La corriente de capitales externa, que las autoridades atribuyen a la confianza que despierta en los inversores externos el éxito del plan económico, está motivada por la alta rentabilidad financiera que las economías latinoamericanas proporcionan en comparación con la baja rentabilidad en los países desarrollados —especialmente en los Estados Unidos—. Los capitales se han dirigido no sólo a la Argentina, Chile y México, sino también a Brasil, y están sujetos a las oportunidades de rentabilidad financiera y no a corrientes de inversión productivas.

La estrategia oficial, mientras realiza forzadas interpretaciones sobre el carácter de las importaciones en cuanto a lo que representan los bienes de capital, es aprovechar esta época de dólar abundante en el mundo para seguir financiando su plan económico. Pero, tímidamente comienzan a reconocer que el horizonte no es de tranquilidad, primero en el reconocimiento que la balanza comercial de 1994 será deficitaria; segundo, cuando plantean la necesidad de un menor consumo interno; tercero, cuando plantean que es necesario ir amentando la financiación interna de la inversión, y cuarto, cuando por medio del presidente de la Nación

se advierte a la población que no continúe endandándose porque puede haber dificultades para pagar los préstamos.

En conclusión, las cifras del presupuesto referidas al sector externo no son creíbles y uno de los puntos de apoyo del plan económico —tipo de cambio invariable a ultranza, forzando la reconversión productiva— encuentra su posibilidad de permanencia gracias a los capitales golondrina que encuentran altas rentabilidades financieras. Un cambio en las condiciones financieras internacionales que revierta esta corriente de capitales sería letal para el plan económico y constituye el peligro más importante.

#### *Distribución del ingreso*

— En la década del 70 en la Argentina el 30 % de la población más pobre recibía el 11,4 % del ingreso nacional, mientras que el 10 % más rico percibía el 28,1 por ciento (datos de 1975).

En octubre de 1992, luego de 18 años de planes de ajuste (con alguna pequeña excepción), en el Gran Buenos Aires el 30 % de la población más pobre percibía el 9 % del ingreso nacional, mientras que el 10 % más rico percibía el 34,4 por ciento.

Si consideráramos el 30 % más pobre percibiendo el 9 % del ingreso y lo comparamos con el 30 % más rico que recibe el 64,3 %, vemos que por cada peso que reciben los pobres, los ricos reciben 7,14 pesos.

Los planes de ajuste, y el plan de convertibilidad no es más que la continuación de los planes de ajuste anteriores, han conducido a la concentración del ingreso y a la regresión en cuanto a las condiciones de vida de las mayorías. Y esto no está previsto cambiarlo, la pobreza aparece como una variable a ser mantenida, solamente se vuelcan los recursos necesarios para quitarle sus aspectos revulsivos.

#### *Deuda externa*

La deuda externa pública ha sido privilegiada en su tratamiento por parte del equipo económico dado que se ha esmerado para mantener el apoyo de los acreedores externos al plan de convertibilidad.

Analizando las cifras de la deuda externa pública entre los años 1991 y 1994 (este último cifras estimadas) se observa que prácticamente el monto total de la deuda no varía, está entre 54.000 y 55.000 millones de dólares. Pero se destaca que la deuda con organismos financieros internacionales y acreedores oficiales incrementa su participación relativa de un 30 % a un 40 %; y que la deuda con bancos comerciales reduce su participación relativa de un 56 % a un 39 %. Esto significa que el esfuerzo realizado ha beneficiado a los acreedores privados que han reducido sus acreencias en unos 8.000 millones de dólares, pero se han incrementado las deudas con organismos internacionales y en bonos dolarizados.

También se han pagado intereses del orden de los 3.000 millones de dólares anuales.

Cuando mencionamos el esfuerzo realizado debemos poner, en primer término, que entre 1990 y 1994, el período considerado, ingresan 24.387 millones de dóla-

res por la privatización de las empresas del Estado. Se trata de 9.752 millones de dólares en efectivo y 14.365 millones de dólares en títulos de la deuda, considerados a su valor nominal. Tomamos el valor nominal porque la deuda está consignada a su valor nominal.

Al considerar estas cifras, lo primero que se nota, es que no existe una baja en la deuda externa proporcional al ingreso por privatizaciones. Los títulos que se rescataron reducen directamente la deuda, y los dólares cobrados han ido sustancialmente a efectuar pagos de la deuda externa, entonces, esto sólo puede tener una explicación: las condiciones en que se ha negociado la deuda han determinado que se pagaran importantes sumas pero la deuda no ha disminuido sustancialmente. Se han beneficiado los bancos comerciales acreedores, que tan buena relación tienen con el equipo de Economía, han bajado sus acreencias, pero se han tomado nuevos créditos y el endeudamiento total no ha disminuido.

A su vez el retraso del tipo de cambio que produce un dólar barato, y la caída de las tasas de interés en los Estados Unidos (se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 16 años), han impulsado al sector privado de la Argentina a endeudarse en el exterior.

Las tasas de interés en la Argentina son muy elevadas y para reducir el costo del financiamiento bancario (un 18 % anual para empresas de primera línea) se recurre a emitir y colocar en el exterior bonos de deuda privada, llamados obligaciones negociables. Así se obtienen tasas anuales entre el 8 % y el 11 %, que son baratas en relación con el costo interno del dinero pero que para los inversores del exterior representan una tasa muy superior a la que pueden conseguir en las principales plazas financieras. Se calcula que entre 1991 y 1993 el monto de estas obligaciones asciende a unos 6.000 millones de dólares.

También el gobierno argentino incursiona en este tipo de operatorias colocando títulos públicos en Europa. Tanto para las empresas privadas como para el sector público esta operatoria, que les resulta útil en el corto plazo, presenta interrogantes sobre la posibilidad de su continuidad ante un incremento de los intereses a nivel internacional.

Pero para el sector privado se presenta un grave interrogante adicional dado que una devaluación —o sea una ruptura del seguro de cambio oficial que significa el plan de convertibilidad— pondría a estas empresas en una difícil situación. Algo así se vivió durante el plan de Martínez de Hoz dado que las empresas se endeudaron en el exterior —incluso alentadas desde el Banco Central para que lo hicieran— y luego la devaluación las colocó en la imposibilidad de honrar sus compromisos externos. Así fue que la solución que encontraron los interrogantes de aquel equipo económico —algunos de los cuáles integran el actual equipo económico— fue el estatizar la deuda externa privada pasándole casi 8.000 millones de dólares de deuda al Estado. Luego se lamentan de la ineficiencia estatal y de la pesada carga heredada:

“En el caso de los efectos patrimoniales de las viejas políticas estatistas, se presenta un análisis específico en el capítulo IV. Se identifica la carga de gravámenes

que soporta aún la economía pública, como consecuencia de esas políticas y la mala administración.” (Presupuesto 1994, mensaje, T. P. N° 98, página 3786.)

“Las empresas públicas han impuesto a través de los años una pesada carga sobre la sociedad argentina. Fruto del indescifrable desmanejo que sufrieron dichas empresas en el pasado es la enorme deuda, interna y externa, que ha quedado como herencia para las generaciones presentes y futuras.” “A pocos escapa, en este sentido, que los déficit de las empresas del Estado beneficiaron a poco más que un puñado de funcionarios deshonestos que promovieron, junto a proveedores y contratistas ávidos de ganancias fáciles, niveles de ineficiencia y corrupción hoy intolerables para los consumidores y contribuyentes argentinos.” (Presupuesto 1994, mensaje, T. P. N° 98, página 3882.)

Ante estas duras expresiones cabe la reflexión, expresada más arriba, sobre la permisividad de los funcionarios públicos de rango político —aunque en esa época eran delegados de un poder dictatorial que había destruido las instituciones de la Constitución— que llevó a cabo la estatización de la deuda externa privada, y que ideó y gestionó el endeudamiento externo de las empresas públicas con el fin de financiar el plan económico de la tablita de cambio fijo. También la referencia a los fraudes que proveedores y contratistas realizaron en convivencia con funcionarios de las empresas públicas, que debe encontrarse debidamente fundamentada para ser incorporada en el mensaje del presidente de la Nación, lleva a preguntarnos sobre si el Ministerio de Economía dará la necesaria información sobre los grupos económicos beneficiados, los personajes actuantes y las denuncias penales correspondientes. O todo quedará en una condena genérica.

En resumen, la experiencia histórica de la Argentina no nos da margen para el optimismo en la materia. Una década y media atrás la conjunción de intereses entre los grandes grupos económicos y los miembros del equipo económico, en el marco de un condenable autoritarismo que impregnaba su gestión, impulsó la caída del salario, la privatización del Estado en beneficio de la gestión privada, la apertura de la economía, un dólar barato con cotización fija a plazo —la tablita—, y el incremento desmesurado del endeudamiento externo público y privado. La “eficiencia” era el signo del cambio. El fin de fiesta llegó pronto en medio de una especulación lesatada que construyó fortunas privadas a costa del esfuerzo de los sectores mayoritarios del país. Pero quienes habían quedado entrampados en el juego de sus propias especulaciones encontraron el camino de su salvación: pasarle al Estado sus deudas en dólares y lo hicieron, y pasarle al Estado sus deudas en pesos mediante la licuación de sus pasivos, y lo hicieron. Nunca se vio tan claro una conjunción de intereses entre los funcionarios que posibilitaron esas maniobras y las grandes empresas privadas que se beneficiaron con ellas.

Hoy nuevamente está creciendo en forma alarmante el endeudamiento externo de las grandes empresas privadas al amparo de una legislación de convertibilidad que les garantiza 1 peso = 1 dólar. Si existiera una devaluación los reclamos, políticos y judiciales, no se harán esperar para que el Estado “honre” su palabra y se haga cargo de las deudas privadas en dólares.

*Inversión*

No existe una estrategia de desarrollo, todo queda librado al mercado, y la inversión no registra proyectos de importancia. Sólo existe en las áreas no expuestas a la competencia internacional como los servicios y el

sector automotor. Lo demás se relaciona con la tasa de retorno que atrae los capitales golondrina.

**II. Los ingresos**

1. Se prevé los siguientes ingresos tributarios para 1994:

Coparticipados:	Millones de pesos		%
Ganancias .....	6.081,0		18,09
IVA (antes de reembolsos) .....	20.117,2		59,84
IVA - Reembolsos .....	( 1.930,1)		( 5,74)
Internos .....	2.305,5		6,86
Activos .....	105,4		0,31
Presentación espontánea .....	1.296,9		3,86
Otros coparticipados .....	226,7		0,67
Bienes personales .....	195,7		0,58
Combustibles y gas .....	2.290,0		6,81
Energía eléctrica .....	160,2	30.848,5	0,48
No coparticipados:			
Sellos .....	82,9		0,25
Comercio exterior .....	2.185,0	2.267,9	6,50
Otros impuestos .....		500,7	1,49
<b>TOTAL (deducidos reembolsos) .....</b>		<b>33.617,1</b>	<b>100,00</b>

La recaudación tributaria está basada en impuestos indirectos que gravan los consumos, dado que proveen el 75,7 % de la recaudación impositiva total de la Nación. En esto se continúa con la política de jerarquizar los impuestos indirectos; en el Presupuesto de 1993 también representaban el 75 % de la recaudación. El IVA, por sí solo alcanza al 56,6 % de la recaudación total presupuestada.

El sistema impositivo aplicado por el equipo del Ministerio de Economía es de un muy alto grado de regresividad. Sus planteos hacen hincapié en que la equidad tributaria se produce en el momento del gasto. Esto es una falacia dado que se parte de una situación negativa, porque dicho gasto debería ser muy progresivo para compensar la regresividad en el cobro de los impuestos. En este caso el 75 % del gasto total del Estado nacional debería ser específicamente de gasto social, y estaríamos en un punto cero con respecto a la equidad.

El procedimiento en sí es muy sencillo, se aplica un sistema impositivo de una regresividad altísima, mediante el cual los grandes sectores populares financian los gastos del Estado y las transferencias a los sectores más ricos de la población. Luego mediante una cuestionable clasificación se plantea que el gasto es el elemento de distribución progresiva.

A esto se ha añadido un nuevo argumento oficial, tratando de dar fundamento a lo morosamente insostenible, que serían los sectores de altos ingresos los que más gastan y por lo tanto quienes más aportan de los impuestos a los consumos. Esto no es así por dos razones: primero, la gran masa de consumo está dada por los grandes sectores populares y no por los de

mayores recursos; y, segundo, porque los sectores de altos ingresos tienen la posibilidad de escapar legalmente de los impuestos a los consumos, especialmente del IVA. En efecto, gran parte del consumo de estos sectores altos pasa como gasto empresario, tomando las empresas el gasto en sí como deducible del impuesto a las ganancias, y el IVA como recuperable a través del crédito fiscal respectivo.

Del Valle Iberlucea decía en 1915 que debía modificarse el sistema tributario reduciendo los derechos de aduana, y creando el impuesto a la renta o el impuesto al mayor valor. Lamentaba que el Poder Ejecutivo utilizara la teoría de "la conveniencia de crear contribuciones indirectas, porque son de más fácil percepción, porque molestan menos al gobierno, porque no producen protestas inmediatas, como sucede con aquellos impuestos que gravan en forma directa la renta y la riqueza". En estos conceptos, válidos también hoy, se encuentra la crítica a una de las formas más antidemocráticas de política impositiva, dado que quien realmente paga el impuesto —el consumidor final— no sabe que lo está pagando. Gran parte del magro ingreso de los sectores trabajadores se deriva —al ser recaudado como impuesto indirecto contenido en los consumos— al sostenimiento del gasto del Estado que no pagan los sectores económicamente poderosos, a las políticas demagógicas del gasto, al gasto superfluo y a las transferencias —vía Estado— a los grupos de poder económico.

En los países industrializados la política tributaria es muy distinta a la que se aplica en la Argentina, puesto que privilegian los impuestos sobre la renta y los impuestos indirectos, si bien revisten importancia, tienen una participación muy inferior a la existente en nuestro país. Un trabajo del Centro de Estudios Bonaerenses, ba-

sado en datos del FMI y del Ministerio de Economía, proporciona los siguientes datos:

Porcentaje sobre la estructura tributaria

País	Sobre renta (%)	Sobre bienes y servicios (%)
Argentina .....	5,75	51,1
Alemania .....	31,70	24,8
Reino Unido .....	39,80	30,3
Canadá .....	47,30	27,1
Japón .....	50,30	9,0
Estados Unidos .....	46,70	16,0
Suecia .....	44,50	22,8
Suiza .....	40,80	14,3
Dinamarca .....	57,70	33,3
España .....	30,20	27,4

Aunque en este tipo de estadísticas el método utilizado influye en los resultados (en este caso se consideran dentro de la estructura tributaria las contribuciones de la seguridad social) la comparación es válida y demuestra el mayor peso que adquiere el impuesto sobre la renta en los países industrializados.

2. *La recaudación durante 1993.* Transcurridos 9 meses del año 1993 se observa que las metas de recaudación están lejos de poder ser cumplidas al finalizar el año. Sólo se ha recaudado el 66 % de lo previsto, cuando ha transcurrido el 75 % del año. Si bien es cierto que la recaudación no tiene una distribución normal a lo largo del período es interesante observar que los impuestos sobre el comercio exterior han alcanzado el 83 % de lo previsto, activos el 71 %, IVA-internos combustibles entre el 68 y el 70 % y ganancias el 51 %. La marcha de la recaudación refuerza la regresividad del sistema.

Según las estimaciones de recaudación para el año 1993 que efectúa Carta Económica, lo real se situará en 4.109 millones de pesos menos que los 33.732 millones presupuestados esto significa una sobrevaloración del 14 % en las cifras del presupuesto. Considerados los impuestos individualmente encontramos que en IVA-internos-combustibles la sobrevaloración es del orden del 11 al 13 %, mientras que en ganancias es de 43 %. Se trata de estadísticas con un alto grado de acercamiento a la realidad, que ponen en evidencia que las metas de recaudación son calculadas con excesivo optimismo.

3. *La recaudación prevista en 1994 y la real de 1993.* Al cotejar las cifras de recaudación presupuestaria para 1994 con las estimaciones de recaudación real en 1993 se encuentra que la recaudación deberá crecer en 7.083 millones de pesos para cumplir las pautas, lo que significa un 25 % de aumento.

Si las cifras se deflacionan en un 10 % por el crecimiento esperado de los precios y del PBI, aún resta generar un crecimiento real del 15 % en la recaudación.

En realidad se está repitiendo la situación dada en el presupuesto de 1993, se proyectan con excesivo optimismo las cifras de la recaudación impositiva a efectos de justificar un mayor nivel de gasto del que realmente ocurrirá, pero como la poda en las partidas caerá dentro de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo la distribución del gasto real tendrá poco que ver con el diseño del gasto aprobado por el Congreso de la Nación. Esta es la razón por la que se demora la presentación de la cuenta de inversión al Parlamento.

4. *La distribución de los ingresos tributarios.* La masa de impuestos presupuestada se distribuirá de la siguiente forma:

Jurisdicción	millones \$	%
Nación .....	11.757,0	33,1
Provincias Ley Copart. ....	11.228,0	31,6
Provincias Copart. especiales .....	1.950,9	5,5
Seguridad Social .....	7.006,6	19,7
Educación .....	52,7	0,1
Ctas. especiales .....	1.621,9	4,6
Reembolsos IVA .....	1.930,1	5,4
Total .....	35.547,2	100,0

Las modificaciones realizadas en el régimen de distribución de los principales impuestos, producto de la política del actual equipo económico, han reducido las sumas que perciben las provincias respecto de las que les correspondería percibir. Si consideramos tres de los principales impuestos —ganancias, IVA y activos— que representan 24.373,5 millones de pesos, o sea el 73 por ciento del total, y calculamos la distribución aplicando la Ley de Coparticipación Federal sin modificaciones, y comparamos con la distribución que se efectuará considerando las modificaciones, tenemos:

Concepto	S/ley 23.548	S/normas (Millones de pesos)	Diferencia
Nación y Ministerio del Interior .....	10.563,4	7.537,7	— 3.025,7
Provinciales coparticipados .....	13.810,0	9.695,3	— 4.114,7
Provinciales - fondos .....		851,3	+ 851,3
Seguridad social .....		6.236,4	+ 6.236,4
Educación .....		52,7	+ 52,7
TOTAL .....	24.373,4	24.373,4	0,0

Se debe destacar que lo que figura como provincias-fondos son las sumas que corresponden al 14 por ciento del impuesto a las ganancias, y cuya distribución no

alcanza a todas las provincias, sino a una pocas y, dentro de ellas, lo sustancial lo recibe la provincia de Buenos Aires.



Vemos que las provincias han perdido el 30 por ciento de los fondos que les corresponderían de haberse mantenido la distribución tal cual la plantea la Ley de Coparticipación Federal.

## LA POLITICA DE LOS PACTOS FISCALES

Tras los problemas de fondo de la economía argentina aparece siempre la cuestión fiscal: obtener mayores recursos para elevar el superávit operativo (antes del pago de intereses) del presupuesto nacional, o bien mejorar el tipo de cambio sin acudir a una devaluación (por vía de una reducción del costo fiscal de las empresas para que puedan exportar).

La política del gobierno nacional con las provincias, en una primera etapa, comprendió la transferencia de servicios educativos y de salud, que prestaba el Estado nacional, sin generar la transferencia de los recursos para solventar dichos gastos. La argumentación fue que el incremento de la recaudación de los impuestos había permitido que las provincias recibieran más recursos, por lo que no era necesario aportarles sumas adicionales. De esta forma la Tesorería nacional se vio libre de esas erogaciones que pasaron a ser solventadas por las provincias.

También comienzan a implementarse modificaciones (a veces por ley, a veces por decretos de necesidad y urgencia) que afectan los recursos que percibían las provincias, ya sea a la masa coparticipable de la ley 23.548 (por ejemplo el decreto 559/92 que tomaba de la coparticipación sumas para financiar el funcionamiento de la Dirección General Impositiva), o por desvío de fondos de asignación específica (por ejemplo el decreto 2.733/90 que modifica la distribución del impuesto sobre los combustibles).

El gobierno nacional prevé una etapa posterior donde se plantea actuar sobre los recursos propios de las provincias, los que surgen de las propias fuentes tributarias provinciales.

Pero implementar todo esto necesita de algún consentimiento expreso de las provincias que proporcione solidez al esquema. Esto se logra a través del impulso y la firma de los llamados pactos fiscales. Se implementaron dos que se firmaron el 12-8-92 y el 12-8-93 respectivamente.

### a) El primer pacto fiscal

Fue firmado el 12-8-92 y ratificado posteriormente por la ley 24.130. Las disposiciones más importantes fueron:

1º — El Estado nacional retiene un 15 por ciento de la masa coparticipable de la ley 23.548 para atender el pago de obligaciones previsionales nacionales.

2º — El Estado nacional retiene mensualmente pesos 43.800.000 para distribuir entre los estados provinciales a efectos de cubrir desequilibrios fiscales de algunos de ellos.

3º — El Poder Ejecutivo nacional procede a derogar los decretos 559/92 y 701/93 que tomaban fondos que correspondían a las provincias y los utilizaba para financiar el funcionamiento de la Dirección General Impositiva

4º — La Nación garantiza que el monto mensual a distribuir entre las provincias, de acuerdo con la ley 23.548, no será inferior a \$ 725.000.000 por mes, comprometiéndose a aportar las diferencias resultantes y a descontarlas luego cuando la coparticipación crezca por encima de esa suma. Esta garantía operaba hasta el 31-12-93.

5º — Las partes limitan el incremento de sus gastos corrientes, a ser financiados con recursos de coparticipación durante el ejercicio 1993, a un 10 por ciento sobre lo efectivamente erogado por ese concepto durante 1992.

6º — El Poder Ejecutivo nacional se compromete a remitir a las provincias, con carácter automático, los recursos financieros que componen los fondos:

- Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
- Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento (Cofapys).
- Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).
- Fondo Vial Federal.

7º — Las provincias desisten de acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia que se refieran a los decretos 559/92 y 701/92.

8º — Las partes se comprometen a solicitar al Congreso de la Nación el tratamiento de un conjunto de proyectos de ley que son de interés para el Poder Ejecutivo. Entre ellos el de reforma del régimen de previsión social, el de privatización de YPF, el de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la prórroga de algunos artículos de las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado.

El Pacto Fiscal fue perjudicial para las provincias porque algunas de las cláusulas causaron pérdidas de ingresos generando endeudamiento, y la actitud del Poder Ejecutivo nacional torció la aplicación de otras.

Quizá lo más significativo fue lo que sucedió con la retención del 15 por ciento de la masa coparticipable que ascendió a \$ 3.177 millones. Si se hubieran aplicado los porcentajes de la ley 23.548 a las provincias les correspondía el 54,66 por ciento de esa suma, o sea \$ 1.737 millones que las provincias dejaron de percibir.

El gobierno nacional utilizó ese dinero de la siguiente forma:

— Unos \$ 1.000 millones prestados a las provincias en función del cumplimiento de la cláusula de garantía de los \$ 725 millones de masa coparticipable mensual. O sea que las provincias perdieron \$ 1.737 millones de recursos genuinos, y si bien recibieron \$ 1.000 millones por aplicación de la garantía se los deben al gobierno nacional.

— Los restantes \$ 2.177 millones fueron utilizados para el Sistema de Seguridad Social, pero de ellos unos \$ 90 millones por mes (lo que anualizado da \$ 1.170 millones) se utilizaron para pagar jubilaciones de las fuerzas armadas que antes se pagaban de la Tesorería Nacional. O sea que parte del esfuerzo provincial vino a aliviar gastos de la Tesorería y no se utilizó para mejorar lo que perciben los jubilados.



Por otra parte, el 28 de octubre de 1992 se dictó el decreto 2.021 por el cual:

- a) Se deroga el impuesto sobre el kerosene, gas oil, diesel oil, fuel oil, aeronauta, solvente y aguarrás.
- b) Se reduce el impuesto sobre las naftas.
- c) Se deroga el impuesto sobre el gas natural.

Lo que determina una sensible reducción en la recaudación de estos impuestos.

La aplicación de este decreto implica una importante disminución (superior al 20 por ciento) de los fondos específicos de las provincias, cuyo fin es dotar de una imprescindible infraestructura vial, eléctrica y urbana, a cada provincia.

Entendiendo que este decreto era violatorio de la cláusula 5 del Pacto Fiscal, la Comisión Federal de Impuestos emitió la resolución general interpretativa 14, con fecha 23-3-93, que en su artículo 1º expresa: "Interpretar con carácter general, que el decreto 2.021/92, como consecuencia de eliminar hechos imponibles y reducir los importes a liquidar por los subsistentes del impuesto creado por el título III de la ley 23.966, desfinancia el Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) y el Fondo Vial Federal, importando, tal medida una violación palmaria del gobierno nacional a los compromisos que asumiera por el Acuerdo del 12 de agosto de 1992".

El 5-5-93 el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 937 que establece un reintegro fiscal del 15 % sobre el precio de venta de bienes de capital nuevos de producción nacional, para las operaciones que se realicen hasta el 31-12-94 y que percibirán los fabricantes de dichos bienes. Los fondos para estos pagos se tomarán de la recaudación diaria de los impuestos nacionales coparticipados.

La Comisión Federal de Impuestos emitió el 20 de mayo de 1993 su resolución general interpretativa 15, que en sus considerandos expresa entre otros conceptos:

— Que se beneficiarán los fabricantes que cuenten con planta fabril ubicada en provincias que hayan eliminado los impuestos de sellos y de ingresos brutos sobre esas operaciones.

— Que la DGI tomará los fondos de la recaudación de los impuestos nacionales coparticipados.

— Que el reintegro fiscal no se computará como materia imponible en el impuesto a las ganancias y no formará parte de la base de imposición del IVA.

— Que las provincias son agraviadas por:

1. El otorgamiento del reintegro importa una detracción de la masa coparticipable que afecta los derechos de las provincias a percibir tales recursos, y que infringe la ley 23.548 y el compromiso asumido por el Estado nacional en la cláusula sexta del convenio firmado el 12-8-92.

2. La opción compensatoria que se reconoce a los contribuyentes respecto de los impuestos a las ganancias, activos e IVA, puede resentir uno u otro de los mecanismos de reparto, los cuales utilizan coeficientes de distribución diversos para la Nación y las provincias, y aplica los recursos a afectaciones específicas dispares,

con lo cual la asignación del financiamiento altera la voluntad de las leyes, dependiendo ahora de la decisión que adopten los sujetos pasivos de los tributos al ejercer la compensación.

3. Se abandona el espíritu de concertación voluntaria y multilateral mediante el consentimiento deliberado y expresado libremente por todos los fiscos intervinientes, y se lo sustituye por una decisión unilateral y compulsiva de una sola de las partes —la Nación—, con un debilitamiento del federalismo.

A su vez, al privar del beneficio a los titulares de empresas con planta fabril ubicada en provincias que no hayan eliminado los impuestos de sellos y sobre los ingresos brutos sobre las mismas operaciones, se estimula una fuerte presión de los contribuyentes locales sobre los gobiernos provinciales para que se suspendan dichos gravámenes. Esto constituye una indebida interferencia sobre la autonomía de las provincias y proporciona un trato de disfavor a los contribuyentes de aquellas jurisdicciones locales que resuelvan no someterse a los requerimientos de limitación de sus gravámenes. Se trata de un quebrantamiento al principio de lealtad federal.

La exorbitancia de la limitación pretendida a las facultades tributarias provinciales, más proviniendo de un decreto del Poder Ejecutivo, a cuyo dictado no ha concurrido la voluntad general de la Nación —que se la reconoce en la Cámara de Diputados, conformada por los representantes del pueblo—, ni con el concurso de la instancia federal en la formulación de las leyes —que se instala en la Cámara de Senadores compuesta por los representantes de las provincias—, descalifica *ab initio* el intento de unitarizar los sistemas tributarios provinciales por tal vía.

La metodología que se instaure por el decreto 937/93 no respeta el principio según el cual toda modificación al régimen fiscal federal de coparticipación debe provenir de una ley convenio que contemple la necesaria y expresa adhesión de las jurisdicciones provinciales.

La medida merece múltiples reparos constitucionales por constituir una indebida injerencia en las autonomías provinciales, por estar inspirada en una política segregadora y discriminatoria, por pasar por alto que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, por violentar la Constitución mediante desigualdades entre los contribuyentes por razones de vecindad dentro de la República, y por lesionar los principios de uniformidad y proporcionalidad al territorio que debe inspirar el sistema fiscal nacional.

La parte dispositiva expresa: "Interpretar con carácter general que el decreto 937/93, por las razones desarrolladas en los considerandos precedentes, se encuentra en palmaria pugna con la ley 23.548 y el espíritu que inspirara y compromisos que asumiera el gobierno nacional por el Acuerdo del 12 de agosto de 1992."

#### b) El segundo pacto fiscal

En octubre de 1992 el gobierno nacional anuncia el denominado "Plan Cervantes", por haber sido dado a conocer en el Teatro Cervantes de la ciudad de Buenos Aires, el que se encuentra constituido por un conjunto de medidas destinadas a mejorar la situación fiscal de productores.

Las medidas implican sacrificio fiscal al proponer la eliminación del impuesto a los activos, disminuir los aportes previsionales, modificar impuestos sobre la energía y reformular los tributos de la ciudad de Buenos Aires, en lo que a decisiones nacionales se refiere. Pero también se plantea la adecuación fiscal de las provincias mediante la eliminación del impuesto a los ingresos brutos y su reemplazo por un impuesto sobre ventas minoristas, eliminación de impuestos energéticos provinciales, eliminación de los impuestos de sellos provinciales, sobre plazos fijos y similares operantes en los municipios. Además se plantea la limitación en la aplicación de los impuestos inmobiliarios, tasas viales y de mantenimiento de caminos y tasas sobre actividad económica en los municipios.

El gobierno nacional, sin esperar a obtener el consenso de las provincias, procede a poner en marcha algunos de los mecanismos de su plan. Así es que elimina el impuesto a los sellos a nivel nacional que, en realidad, sólo tiene aplicación en el territorio de la Capital Federal, pero genera una fuerte presión empresarial sobre los gobernadores para que eliminen este gravamen en las provincias. Además dicta el ya comentado decreto 937/93, avanzando sobre las provincias. La eliminación del impuesto sobre los activos, que regirá exclusivamente en las provincias que firmen el nuevo pacto fiscal, opera en el mismo sentido.

Finalmente el 12-8-93 se firma el segundo pacto fiscal pero sólo lo hicieron 16 provincias mientras que otras 7 no lo hicieron (Catamarca, Chubut, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego). La presión desatada por el gobierno nacional para que las provincias firmaran fue muy intensa.

El pacto incorpora, entre otros, los siguientes compromisos para las provincias:

1º — Derogar el impuesto de sellos comenzando por la operatoria financiera de seguros destinada a los sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción. Al 30 de junio de 1995 deberá estar totalmente derogado.

2º — Derogar los impuestos provinciales y tasas municipales que graven la transferencia de combustible, gas, energía eléctrica y servicios sanitarios; también las que graven el uso para servicios del espacio físico, incluido el aéreo.

3º — Derogar los impuestos que graven los intereses de depósitos a plazo fijo en caja de ahorro, los débitos bancarios, los que graven la nómina salarial.

4º — Modificar el impuesto a los ingresos brutos eximiendo la producción primaria, las prestaciones financieras, las compañías de capitalización ahorro, la compra-venta de divisas, la producción de la industria manufacturera, las prestaciones de servicios de electricidad, agua y gas (salvo los consumos de las familias que podrán seguir siendo gravados), la construcción de inmuebles privados. Para compensar la pérdida de ingresos se plantea elevar las alícuotas de las actividades no exentas, por lo que prácticamente se convierte en un impuesto a los consumos finales con alícuota incrementada.

5º — Poner límites máximos a los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria.

6º — Los municipios también tendrán límites máximos en las tasas viales de mantenimiento de caminos.

7º — Implementar regímenes de fuertes retenciones, pagos a cuenta y anticipos impositivos.

8º — Propender a la privatización de los servicios, prestaciones y obras, cuya gestión actual se encuentra a cargo de las provincias, a la liquidación de las empresas, establecimientos o haciendas productivas, cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las provincias.

9º — Adherir a la desregulación implementada por el decreto 2.294/91, derogar el carácter de orden público de los aranceles correspondientes a honorarios profesionales, liberar al sector comercial de restricciones particulares (libre instalación de farmacias, derogación del monopolio de los mercados mayoristas, de horarios comerciales, etcétera), adherir a la política federal minera del decreto 815/92, en materia portuaria al decreto 817/92, y en materia de medicamentos al decreto 150/92.

10. — Hacer de aplicación provincial artículos de las leyes 23.690 y 23.697, y los decretos 958/92, 1.492/92, 1.494/92, 1.813/92 y 2.293/92, haciéndolos prevalecer sobre las normas provinciales vigentes. También, en lo que respecta a los accidentes de trabajo, deberán adherir al criterio del artículo 16 de la ley 24.028.

La Nación, a su vez, adquiere los siguientes compromisos:

1º Eliminar el impuesto a los activos.

2º Disminuir los aportes patronales sobre los salarios.

3º Reducir retenciones y pagos a cuenta del IVA.

4º Implementar el sistema de cédulas hipotecarias rurales.

5º Aceptar la transferencia de las cajas de jubilaciones provinciales, en el caso que las provincias decidan pasárselas.

6º No descontar a las provincias la deuda generada por la aplicación de la garantía del piso de \$ 725 millones del pacto anterior.

Tanto la nación como las provincias prorrogan hasta el 30-6-95 la vigencia del pacto fiscal firmado el 12-8-92.

#### o) Conclusiones

Los mencionados pactos fiscales constituyen la forma como el gobierno nacional, más específicamente el Poder Ejecutivo, se inmiscuye en las realidades financieras económicas de las provincias.

Aquello que comenzó trasladando carga financiera mediante el traspaso de servicios educativos y de salud sin la correspondiente financiación, que avanzó mediante la modificación arbitraria —básicamente mediante el dictado de decretos de necesidad y urgencia— de los recursos —coparticipables o específicos— que les correspondían a las provincias, hoy se complementa con la injerencia directa sobre las fuentes impositivas de las provincias. Existe una práctica y un estilo que lleva a atropellar a los estados provinciales y a las realidades municipales, modificando de hecho y autoritariamente situaciones fiscales y económicas que requerirían, de respetarse las normas constitucionales, del consentimiento de las partes involucradas.

Tampoco se encuentra dentro del espíritu democrático la actitud de generar conflictos hacia adentro de las provincias imponiendo modificaciones impositivas nacionales condicionadas a conductas de los gobiernos provinciales.

Asumen una dolorosa dimensión desde el punto de vista democrático los duros conceptos expresados por la Comisión Federal de Impuestos, que consignáramos más arriba, y que podemos tomar como síntesis de las actitudes del Ministerio de Economía: "Existe una inde-

devida inferencia en las autonomías provinciales, inspiradas en una política segregadora y discriminatoria, violenta la Carta Magna mediante desigualdades entre los contribuyentes, y lesiona los principios de uniformidad y proporcionalidad al territorio que debe inspirar el sistema fiscal nacional".

##### 5. La recaudación de la seguridad social.

5.1. Se presupuestan los siguientes ingresos para la seguridad social:

	Millones de \$		
Aportes personales .....	1.767,4		
Contribuciones patronales .....	8.501,8	10.269,2	
INSSJP .....	2.152,5		
Otros .....	528,9	2.681,4	12.950,6
Contribución ANSSAL .....	318,9		
Contribución Caja Policía Federal .....	108,8		
Contribución Retirados y Pensionados Militares ....	312,0		
Otros no especificados .....	89,7	829,4	829,4
Total .....			13.780,0

5.2. La recaudación real de 1993 por aportes y contribuciones totaliza al mes de septiembre \$ 7.115 millones de pesos. Si proyectamos la recaudación al 31-12-83 tenemos un total de 9.350 millones por estos conceptos.

El presupuesto para 1994 incorpora una variante, desde el 1º-1-94 se considera que el aporte personal de los trabajadores se incrementa al 11 % y que el sector público sólo retiene un 30 % de esas sumas. Pero, a efectos de determinar la pauta de crecimiento de la recaudación utilizada para confeccionar el presupuesto, efectuamos el siguiente cálculo: determinamos la masa salarial anual estimada y aplicamos sobre ella el 26 % como si no existieran cambios en la reglamentación. Este cálculo determina:

1993: Recaudación real estimada .....	9.350,0
1994: 26 % sobre 53.136,3 .....	13.815,4
Incremento de recaudación .....	4.465,4
Porcentaje de incremento .....	47,8

Esta pauta se nos ocurre exagerada, aún si se la deflaciona en 10 puntos por los incrementos esperados en inflación y PBI queda un incremento real de 38 % a ser justificado por crecimiento de la masa salarial y reducción de la evasión.

La masa salarial en el presupuesto de 1993 alcanzaba a 37.130 millones de pesos (el 15 % del PBI), mientras que en el presupuesto de 1994 alcanza a 53.136,3 millones (el 19 % del PBI).

Si se hubiera mantenido la misma presunción de porcentaje de la masa salarial sobre el PBI, o sea el 15 %, la recaudación sería de \$ 8.259,8 millones en lugar de los \$ 10.269,2 millones, o sea \$ 2.009,4 menor.

Esta sobre estimación de los ingresos, vía incremento injustificado de la masa salarial esperada, quita credibilidad a los planteos presupuestarios.

5.3. El secretario de Seguridad Social, Walter Schulthess, ha expresado respecto de la recaudación:

a) Que existió un error al preparar el presupuesto porque se consideró que la reforma previsional estaría operando a partir del 1º-1-94 cuando, en sus aspectos recaudatorios, comenzaría a tener vigencia el 1º-7-94. Esto significa que durante 6 meses los aportes de los trabajadores (el 10 % del sueldo) se incorporará íntegramente al sector oficial, entre \$ 1.400 y \$ 1.800 millones.

Indudablemente, este tipo de errores hacen que el presupuesto pierda la seriedad que debería caracterizarlo.

b) Se reducirá la evasión y, especialmente la moratoria para los autónomos aportará \$ 1.720 millones de incremento de recaudación en el año. Se trata de un millón trescientos mil aportantes por unos \$ 1.030 anuales cada uno, más 500.000 acogidos a moratoria con unos \$ 840 anuales cada uno.

Nuevamente encontramos un excesivo optimismo en el cálculo al no tenerse en cuenta la deserción que se produce en las moratorias de autónomos. Tiene un alto impacto inicial, pero también una caída vertical en pocos meses. La explicación está dada por las características de las actividades autónomas. Salvo la parte de empresarios, profesionales y comerciantes grandes, el grueso de los autónomos son actividades de bajos ingresos y alta precariedad. Allí es donde primero se sienten las dificultades en el ingreso de los sectores populares, allí las alternativas entre comprar comida, ropa, medicamentos, pagar el alquiler, etcétera, o pagar la jubilación son reales y se expresan con toda crudeza. Lo más probable es que no se cumpla la pauta de recaudación.

5.4. Existe un importante desbalance entre lo que aportan al sistema la Caja de la Policía Federal y el

Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares y los egresos por sus pasividades. Alcanza a \$ 1.314,7 millones (\$ 420,8 millones, contra \$ 11.735,5 millones).

5.5. Un tema de importancia es el anuncio del ministro de Economía de reducir los aportes patronales sobre las remuneraciones a efectos de otorgar ventajas económicas al sector empresario. Esta es una práctica que ya se implementó durante la época de Martínez de Hoz.

Preocupan dos temas; por un lado la posible discrecionalidad que asumiría el ministro de Economía al determinar para qué sectores, para qué regiones y en qué porcentajes operarán las reducciones. Ello podría

ser utilizado, entre otras prácticas, como una forma de presión sobre las provincias que no se avengan a cumplir las directivas que el ministro de Economía imparte.

Por otro lado preocupa la merma en la recaudación que afectaría a la seguridad social; a este respecto el secretario Schulthes ha expresado que si se le disminuyen los aportes a la Seguridad Social le tienen que garantizar los ingresos. Se trata de un reconocimiento del impacto que tendrá la medida que piensa tomar el ministro de Economía y, lo más probable es que se pierdan esos ingresos y la variable de ajuste sean, una vez más, los montos de las jubilaciones y pensiones.

6. *Recursos de la administración Nacional.* El resumen es el siguiente:

Ingresos corrientes		Millones de \$	
Tributarios			
Directos .....	4.216,6		
Indirectos .....	17.622,9	21.839,5	
Contrib. Seg. Soc. ....		13.780,0	
No tributarios .....		1.268,7	
Ventas Bienes y Serv. ....		462,0	
Rentas de la Propiedad .....		919,6	
Transferencias .....		78,9	38.349,0
Recursos de capital.....			1.631,6
TOTAL .....			39.980,7

III. LOS EGRESOS

1. Fija un gasto total para la Administración Nacional de \$ 39.980,7 millones, de los cuales \$ 39.367,8 millo-

nes son gastos corrientes y \$ 3.612,8 son gastos de capital.

La distribución del gasto por finalidad y su comparación con la del presupuesto 1993 muestra:

Finalidad	1994 mill. \$	%	1993 mill. \$	dif. \$	Variación %
1. Admin. gubernamental ..	3.862	9,6	3.864	- 2	—
2. Defensa y seguridad ....	3.582	9,0	3.410	+ 172	+ 5,0
3. Servicios sociales .....	25.655	64,2	24.230	+ 1.425	+ 5,9
4. Servicios económicos ....	3.763	9,4	4.561	- 798	-17,5
5. Deuda pública .....	3.118	7,8	3.584	- 466	-13,0
Totales .....	39.980	100,0	39.650	+ 330	+ 0,8

Existiría una baja relativa del gasto público dado que las cifras se mantienen prácticamente iguales, pero para 1994 se espera un crecimiento combinado de precios y del PBI del orden del 10 %.

2. Los gastos de la finalidad Servicios Sociales ascienden al 64,2 % del gasto total, pero es necesario realizar algunas consideraciones que relativizan las conclusiones que a primera vista pudieran surgir.

Los gastos de la Seguridad Social, que suman 19.040,9 millones de pesos, se incorporan en Servicios Sociales, pero creemos que es necesario segregarlos para analizar el rubro. Resulta suficientemente conocido que las jubilaciones y pensiones deberían, por lo menos, triplicarse para garantizar la subsistencia de la mayoría de los jubilados y pensionados, especialmente aquellos que cobran los valores mínimos. Por lo tanto, a pesar

de la importancia relativa que esta suma tiene dentro del rubro Servicios Sociales la realidad que encubre es que no alcanza para satisfacer las necesidades mínimas de los jubilados.

Su incorporación, y por eso la segregamos, da una imagen de progresividad en el gasto público que no es tal.

También se incorporan en el rubro las Obligaciones a Cargo del Tesoro que corresponden a transferencias que obligatoriamente la Tesorería debe realizar a las provincias. Se trata de 2.122,1 millones de pesos, que incorpora rubros tales como fondos para el conurbano e infraestructura básica provincial, de distribución especial, y que suma 851,3 millones de pesos.

También se incorporan 381 millones del gasto de la Presidencia de la Nación, que se trata mayormente de gasto dirigido a la alta tecnología (Conicet, Comisión de Energía Atómica, INAP, CN Actividades Espaciales, y el Instituto de Ciencia y Técnica Hídrica, totalizan 285,6 millones de pesos de ese total).

Por su parte el Ministerio de Defensa suma 1.851,6 millones de pesos donde, si restamos 1.443,5 millones de pesos de jubilaciones y retiros que hemos incluido en el análisis respectivo, restarían 408,1 millones de pesos que deben corresponder a los gastos de formación y capacitación militar, por lo que incorporarlo como gasto social puede ser cuestionable.

Existe la idea que detrás de esta clasificación se intenta fundamentar hacia la sociedad que el gasto público social prevalece sobre los demás. Ya con motivo del presupuesto de 1993 y de un publicitado plan social se dio una situación similar y que motivó comentarios como el siguiente: "Se trata de una clasificación poco ortodoxa del gasto del sector público. Se asimila al concepto de gasto público todo aquello que implique una contraprestación de servicios cuyo cobro sea compulsivo, tales como las asignaciones familiares. El plan social no es más que la confección de un catálogo donde los ministerios y secretarías exponen todo aquello que puede tener una connotación social sin mayores pretensiones definitorias. Pasado el impacto publicitario inicial, la cuestión se fue diluyendo en vista de la ausencia de proyectos novedosos o que excedieran la operatoria normal de los organismos públicos". (F. García Lafuente, "Clarín", 15-8-93).

Reiteramos aquí la necesidad de cotejar el gasto presupuestado con el gasto real porque es la única forma de determinar qué puede haber sido gastado realmente en sentido social. Por ejemplo se han conocido cifras de cumplimiento presupuestario por el período enero-septiembre-1993 ("El Cronista Comercial", 10-11-93).

Allí se observa que la ejecución promedio es del 62,7 % de las partidas, por lo que estimamos un cumplimiento del 83,6 % al fin del año. Esto significa que las partidas no se gastan en su totalidad. Como esto depende de cada partida (por ej.: el Ministerio de Educación había ejecutado el 69,3 %, pero el Ministerio de Salud había gastado el 44,3 % de sus partidas) se da aquí una redistribución del gasto que es necesario conocer para llegar a conclusiones válidas.

Si en salud el cumplimiento era el más bajo, el servicio de la deuda pública era de los más altos con un

64,7 %. Por supuesto que una apertura de las partidas para conocer lo realmente gastado en cada una de ellas puede mostrar un relegamiento aun superior del gasto social.

3. — El servicio de la deuda pública insumirá \$ 3.118 millones, y esto significa:

El 81 % del Gasto de Administración Gubernamental;

El 87 % del Gasto de Defensa y Seguridad;

El 45 % del Gasto en Servicios Sociales (sin jubilac.);

El 83 % del Gasto en Servicios Económicos;

El 9,3 % de la recaudación tributaria presupuestada;

El 10,5 % de la recaudación tributaria de 1993;

El 223 % del Gasto asignado a las universidades;

El 489 % del Gasto del Ministerio de Educación (sin universidades);

El 323 % del Gasto del Ministerio de Salud.

El peso del servicio de la deuda (externa e interna), sigue siendo grande; de cada \$ 100 que se recaudan de impuestos, \$ 10 se dirigen a pagar intereses de la deuda. Los intereses de la deuda externa son unos 2.930 millones de dólares, por lo que se convierte en el principal elemento de este rubro.

4. — El equipo económico plantea que es necesario ser regresivo en el cobro de los impuestos para ser progresivo en el gasto. Pero reiteramos aquí lo expresado más arriba en el sentido que el gasto tendría que ser doblemente progresivo: primero para neutralizar la regresividad inducida en el cobro y, segundo, para incorporar la necesaria progresividad a la que la sociedad debe tender.

Y esto no sucede, ni siquiera se neutraliza la regresividad del sistema impositivo. Según el Presupuesto (página 3932), si consideramos aparte el sistema de seguridad social por su especificidad, pero considerando como gasto social la parte impositiva que se deriva al mismo, el 71,7 % de los ingresos de la Administración Nacional proviene de impuestos indirectos.

Al considerar el gasto, y dando por buena la clasificación que hemos criticado, el gasto social sólo llega al 48 % del gasto total. En conclusión, los sectores populares mayoritarios que a través de su consumo aportan lo sustancial de los ingresos públicos (71,7 %) a través de los impuestos indirectos, no reciben a través del gasto social la devolución de esa suma. En conclusión están financiando el gasto del Estado, beneficiando a los sectores más ricos que no aportan lo que deberían ni siquiera para un gasto social nentro.

También sería necesario analizar la eficiencia en lo que se denomina gasto social, dado que encubre partidas que tienen una utilización susceptible de manejos políticos.

Pero existe aun otro aspecto de este tema y que está dado por el dogmatismo ideológico del equipo económico: cuando hablan de política social se refieren a la política de administración del gasto social y, cuanto más a la política fiscal. Pero dejan afuera lo más importante de una correcta política social que son las políticas de ingresos y de empleo.

Ya hemos comentado la regresividad de la política de ingresos, hoy peor que hace 18 años, y de la variable de ajuste en que se ha convertido el empleo que ha registrado los peores índices de la serie histórica.

Es necesario integrar la política social con la política económica, no se puede hacer mucho desde el lado compensatorio si no se modifica el perfil de la producción. Existe la necesidad de que se considere a la familia como el principal efector de la política social, que se defina una serie de indicadores sociales básicos y que se publiciten adecuadamente. Asimismo es necesario impulsar la eficiencia en el denominado gasto social.

#### IV. CONCLUSIONES

Consideramos que, en lo sustancial, el Presupuesto para 1994:

1º — Sigue manteniendo las facultades que otorgan al Poder Ejecutivo discrecionalidad en cuanto a la obtención y aplicación de recursos.

2º — Pretende ratificar la política anticonstitucional del dictado de decretos de "necesidad y urgencia".

3º — Pretende otorgar atribuciones al Poder Ejecutivo sobre aquellas sumas que legalmente le corresponden a las provincias y que se incluyen en la Jurisdicción 91.

4º — Plantea un marco macroeconómico que elude considerar los problemas productivos de distintos sectores de la actividad económica.

5º — Asimismo elude los problemas de desempleo y subempleo que afectan a la población, e ignora el regresivo cuadro que exhibe la distribución del ingreso en nuestro país.

6º — Plantea un comportamiento del sector externo que tiene poco que ver con la realidad.

7º — Proyecta un futuro inmediato donde el mercado y el tipo de cambio fijo son las piezas clave, abusando de una corriente financiera de capitales externos que, por el momento, posibilita la existencia del plan de convertibilidad.

8º — Mantiene un tratamiento de la deuda externa pública, que no se ha visto reducida sustancialmente a pesar de los 24.387 millones de dólares (efectivo y títulos VN) que han producido las privatizaciones.

9º — Los ingresos tributarios se basan en un 75 % en impuestos indirectos, hecho que imprime características regresivas al sistema.

10. — Los ingresos presupuestados son muy optimistas. Pensamos que difícilmente se podrá incrementar en un 25 % la recaudación de 1994 respecto de la de 1993.

11. — La distribución de los ingresos tributarios ha ido recortando las sumas que les corresponden a las provincias, las que se ven presionadas a la firma de los llamados Pactos Fiscales.

12. — La recaudación prevista para la Seguridad Social expresa un importante incremento que no encontramos justificado por las explicaciones de las autoridades del área.

13. — La distribución del gasto sigue mostrando un importante peso de los servicios de la deuda externa.

mientras que aparecen como insuficientes las sumas asignadas a otras áreas (por ejemplo, a las universidades nacionales).

14. — El llamada "Gasto Social" se conforma con una metodología de considerar arbitrariamente como tal partidas de diversa índole.

15. — La falta de las cuentas de inversión de los ejercicios 1991 y 1992, y de datos precisos acerca de la ejecución presupuestaria que se va operando durante 1993, relativiza cualquier conclusión que se puede plantear respecto de cómo se utilizan los recursos.

16. — A pesar de ello, las cifras conocidas nos llevan a afirmar que la forma en que se gasta no llega a neutralizar la regresividad aplicada en el sistema impositivo.

17. — No existe una integración entre la política social y la política económica, por ello los aspectos más importantes de una correcta política social, el ingreso y el empleo, son los más golpeados por la política económica que los utiliza como variables de ajuste.

2

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO HARDY

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 1994

Todo presupuesto implica una determinada interpretación de la realidad y del rol del Estado y un modelo implícito.

El sometido hoy a nuestra consideración es expresión del modelo en vigencia. Parte, en consecuencia, de un concepto de abordaje. En el mundo de nuestros días las naciones subdesarrolladas deben resignar su integración interna en beneficio de la inserción en esquemas multinacionales de complementación. Implica ello, la especialización en aquellas actividades que estén en mejores condiciones de transar, internacionalmente, dejando al resto abandonado a su suerte. Es decir, una versión remozada de la teoría de las ventajas comparativas —en rigor de las ventajas relativas— concebida en 1817 para resolver los problemas que enfrentaba la pujante manufactura británica en su expansión. Como tal tuvo escasa fortuna en la realidad de las políticas económicas. Sólo la aplicó Inglaterra —y la impuso a los países incluidos en su órbita— mientras conyó a sus intereses nacionales.

La repudiaron, en cambio, todos los países que recorrieron el camino de su desarrollo independiente. Estados Unidos desde los tiempos de Hamilton, Alemania, bajo la tutela de Bismarck y la inspiración de Litz; más recientemente el Japón, para no dar sino algunos ejemplos. Su reverdecimiento en nuestros días, no obedece a razones académicas. En un mundo en que las grandes corporaciones multinacionales son la realidad económica predominante, los intereses de ellas entran en contradicción con los propios de los Estados nacionales. Hace a su racionalidad el desenvolvimiento en cada país de los sectores que, según sus condiciones natura-

les y su dotación de recursos, mejor encajen en sus planificaciones desplegadas en escala planetaria, con el abandono, por ineficientes o antieconómicas de las restantes posibilidades. El Estado nacional, en cambio, tiene como misión que hace a su esencia, la integración, mediante el desenvolvimiento de todas las potencialidades incluidas en su territorio, de las regiones geográficas, los grupos humanos y los sectores sociales.

Es el Estado, la mayor creación política concebida por la humanidad en su devenir hacia formas superiores de articulación social. No el Estado gigante e intervencionista, propio de las formulaciones populistas hoy en crisis, sino el Estado que, respetando las leyes de la economía y apelando a la capacidad creadora de la iniciativa privada, induce el flujo de recursos hacia las actividades de mayor interés social y político, mediante el uso del instrumental inductivo de que dispone, es decir estrategia arancelaria, monetaria, cambiaria, impositiva y crediticia.

Algo que implica un obstáculo para el internacionalismo de las transnacionales. Los recursos, según su interpretación, deben ser asignados exclusivamente por la mano invisible del mercado. En nuestros tiempos, signados por la altísima concentración económica, implica ello, dejar la planificación en manos de los grupos dominantes, pues no estamos en la época del surgimiento del liberalismo, cuando la realidad estaba dada por la atomización de la oferta y la dispersión de la demanda. De tal forma, lo que pretende presentarse hoy con sedicente ropaje modernista, no es sino un anacronismo del siglo XVIII y parte del XIX, eso sí puesto al servicio de muy reales intereses actuales.

En este punto, los desarrollistas no necesitamos improvisar nuestra posición. La planteamos teóricamente hace más de treinta años y la aplicamos durante 1958/62 en aquel gobierno tantas veces invocado por algunos políticos de hoy, para hacer exactamente lo contrario de lo que se realizó entonces. El Estado no debe interferir a la actividad económica, ni distorsionar el juego de las leyes económicas con procedimientos intervencionistas del tipo de los precios máximos las concertaciones o el manipuleo burocrático del tipo de cambio, pero, al mismo tiempo puede renunciar a su papel de orientador del proceso económico, en tanto vértice político de la Nación, síntesis de los sectores que la componen y garante del bien común.

Tenemos el ejemplo de las privatizaciones. Significan ellas un importante instrumento de política económica, siempre que estén incluidas en un programa nacional para el desarrollo de la Nación y respondan, en consecuencia, a una estrategia nacional. Son en cambio, mero desguace del Estado, en favor de sectores cuasi-monopólicos cuando se ejecutan aisladas, fuera de un contexto dinámico y globalizador.

Podemos tomar como expresivo botón de muestra la política petrolera. En el gobierno desarrollista, Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, patrióticamente secundados por Arturo Sabato, tiraron su honra a los perros de la infamia para generar un cambio decisivo en la concepción seguida hasta entonces. La política de apertura al capital privado logró en tres años la prioridad nacional del autoabastecimiento: sirvió a su vez, a un provecho

integral de desarrollo. El petróleo y el gas, fueron para el desarrollo industrial, para la transformación de la infraestructura de transportes; acompañando lo que hacía en materia de vialidad y de industria automotriz para la fundamentación de la hasta entonces inexistente petroquímica. El Estado convocó al capital privado, nacional y extranjero, pero no cedió un ápice de capacidad de decisión, por el contrario, la afirmó, pues era la política nacional y su ejecutor, YPF, quien determinaba el conjunto de la ecuación petrolera. La empresa estatal fue, a su vez, fortalecida, hasta el punto que triplicó su producción y experimentó un ciclo de capitalización, que no reconocía precedentes, ni tuvo sucesión.

Es cierto, que se pensó y no llegó a implementarse por razones de hecho un plan de reestructuración, pero manteniendo siempre su rol de empresa testigo. Con la política actual, la libre disponibilidad determina la internacionalización del mercado petrolero nacional. Son las compañías las que deciden si el autoabastecimiento debe o no ser mantenido, si habrá de importarse petróleo o exportarse, según lo dicen sus conveniencias y las cambiantes coyunturas de plazas altamente monopolizadas. A su vez se destruyó a YPF.

Planteados así los conceptos básicos, es obvio decir que este presupuesto es la versión en el plano de las finanzas públicas del modelo en aplicación. Sus objetivos pasan por mantener un nivel de relativo equilibrio fiscal compatible con el esquema de convertibilidad y por generar un superávit primario que permita obtener las divisas para pagar los servicios del endeudamiento externo. Todo el diseño responde a esa concepción; su arquitectura descansa, a su vez, en algunos supuestos macroeconómicos volcados en la información adicional proporcionada por el Ministerio de Economía.

En primer lugar, la tasa de inflación. Se supone una variación de precios en el mix mayoristas minoristas, del orden del cuatro por ciento. Repesa ella, a su vez, en el supuesto de la inmovilidad del tipo de cambio. De modificarse ese supuesto todo el edificio se desmoronaría, pues carecería de consistencia su basamento, dada la modificación de la estructura de precios relativos que ello acarrearía y el incremento en pesos de los desembolsos necesarios para remesar al exterior los dólares demandados por el servicio de la deuda.

Cabe entonces una primera pregunta. ¿Es real la paridad de un peso igual a un dólar o, por el contrario, estamos dando fe de una ficción? La realidad, siempre más tozuda que el más empecinado de los ideólogos, no está dando la respuesta. El constante ensanchamiento de la brecha negativa de la balanza comercial indica que los productos extranjeros son baratos en la Argentina y los nacionales caros en el exterior. Lo han advertido ya economistas y publicaciones internacionales no precisamente opuesta al actual modelo y lo sentenció el Banco Interamericano de Desarrollo en su última memoria anual: el atraso cambiario constituye una luz roja en la coyuntura económica argentina, indicadora de peligros cada día más inminentes.

No ignoramos, al decir esto, que el grado de endeudamiento en moneda extranjera de los particulares y las empresas torna desaconsejable una devaluación traumática que pudiera a la divisa en su valor real, pero, ello



justamente, está indicando la necesidad de plantear soluciones desde ese mismo momento, antes de que el problema estalle con la violencia de un resorte artificialmente comprimido. Nuestro partido, en su propuesta de diez puntos ha desenvuelto una fórmula viable, desplegada en el marco de una política global para salir del cepo sin el riesgo del desequilibrio económico, y aun político, implícito en una devaluación exigida e impuesta por los hechos.

Resulta, a su vez, irreal la hipótesis relacionada con el comportamiento de la balanza comercial. El año pasado, la conducción económica comenzó vaticinando un ligero superávit, pronosticó, luego, un resultado neutro, calculó más tarde un desbalance no superior a los 300/400 millones de pesos; llevado luego, ya sobre el filo del último trimestre a mil millones. Al cabo del ejercicio el déficit fue de casi 2.800 millones de la moneda norteamericana.

Para el ejercicio en curso se estimó una sustancial reducción del desequilibrio a favor de un incremento superior a los 2 mil millones de dólares en las exportaciones. Con las cifras de los primeros ocho meses de la mano, las cuales reflejan un aumento del 32 por ciento del saldo negativo en relación a igual lapso de 1992, podemos estimar ya para todo el año un resultado negativo no inferior a los 3.500 millones de dólares. Ello pondrá el déficit en la cuenta corriente del balance de pagos en guarismos alarmantemente cercanos a los diez mil millones de dólares.

A pesar de esos datos, con singular pertinacia en el error se calculó para 1994, un saldo adverso de sólo 4.815 millones de dólares, a favor de un salto en las exportaciones de casi tres mil millones de dólares. No hay una sola referencia que sostenga el pronóstico. Todos los indicios disponibles indican lo contrario. Seguirán creciendo las importaciones y tropezarán cada vez con más dificultades las exportaciones. En materia de granos, si bien se registra un comportamiento alcista de los precios, originado exclusivamente en razones coyunturales el impacto en la balanza comercial no será lo suficientemente significativo como para cerrar la brecha. Se registra, a su vez, una fuerte descapitalización de las empresas agrarias, alto nivel de endeudamiento, falta de crédito, desmecanización y retroceso generalizado en materia de tecnificación. Se suma a ello la adversidad climática en forma de humedad excesiva y anegamiento de campos de labranza.

Por el lado del petróleo, cuyas colocaciones superan ya los mil millones de dólares, en gran medida como consecuencia del lento ritmo de actividad económica interna, tampoco puede esperarse demasiado. Las colocaciones están en el límite técnico posible con el actual nivel de producción y con el corto horizonte de reservas. Los precios internacionales están a la baja y todo indica que pueden seguir, cayendo, con lo cual la producción nacional propia de un país con petróleo, pero no petrolero, tiende a quedar fuera de competencia. Las colocaciones industriales permanecen acotadas con una participación inferior a la cuarta parte del total. Se trata en la mayor parte de los casos de comodities y no reflejan excedentes genuinos, sino la falta de mercado interno y la carencia de integración aguas abajo de la estruc-

tura productiva nacional. Sus precios están sujetos a las mismas erráticas condiciones que los de los bienes primarios, habida cuenta que juegan el mismo rol en la nueva división internacional del trabajo.

¿De dónde saldrá entonces el incremento de ingresos por colocaciones externas? Luego de los reiterados fracasos de las proyecciones anteriores el Congreso Nacional debería exigir solvencia técnica y coherencia en las informaciones que manda el Poder Ejecutivo, sobre todo cuando se refieren a un tema de tanta entidad como el presupuesto nacional.

También inspira fundadas dudas otro dato referencial clave: La evolución del producto bruto interno. Se estima un crecimiento del 6,5 por ciento, pero la realidad está mostrando el agotamiento del parcial y segmentado ciclo de recuperación económica generado por la fractura de la inercia inflacionaria. Según un reciente informe de la Universidad Argentina de la Empresa, basado en un representativo relevamiento, en los primeros ocho meses del año, la actividad industrial habría crecido un 1,8 por ciento en relación a idéntico período del ejercicio pasado. Es decir, que trasladada a términos de producto por habitante, reflejaría un incremento virtualmente nulo. Como por el lado del agro tampoco se dan perspectivas alentadoras, según ya lo hemos visto, las exportaciones permanecen estancadas, el consumo interno se reduce por la depreciación salarial y la desocupación y la inversión permanecen por debajo del 20 por ciento, en tanto sus demandas son cubiertas en gran medida por oferta importada, cabe preguntarse cuáles son los rubros de la demanda agregada que explicarían el crecimiento vaticinado.

Una de las consecuencias inmediatas del no cumplimiento de la previsión estaría dada por la caída en las cifras de recaudación presupuestadas. El ejercicio aritmético del que se hace gala en el presupuesto concibe un resultado operativo ajustado, con una masa de gasto similar a la prevista originalmente para 1993, apenas 4,8 millones por debajo de ella. En rigor de verdad, habría aumentado el estipendio, pues luego de sancionado el presupuesto del año pasado se decidió, por decreto, una poda del 10 por ciento para todas las jurisdicciones.

Los recursos también se ubicarían en similares niveles que el año anterior, un 0,6 por ciento por debajo, pero se reduciría el superávit operativo en 32 por ciento, como consecuencia de una disminución del 41 por ciento de los ingresos de capital, producto de la menor percepción por venta de activos del Estado.

¿Son consistentes las hipótesis de gastos y recursos? En materia de gastos se ahincaron las partidas referidas a las finalidades administración gubernamental, servicios económicos y deuda pública. La caída en administración gubernamental se explicaría principalmente por la función Relaciones Interiores al no incluirse suma alguna por cumplimiento de la Garantía por Coparticipación Federal concedida a las provincias. Una previsión objetable a la luz de los datos de la ejecución de este año. En octubre, luego de tres meses en que no remesaron fondos en ese concepto, debió volverse a cumplimentar la garantía, la cual, en

1994, tendrá un monto mayor según lo acordado en el llamado Pacto Federal para la Producción y el Crecimiento.

En servicios económicos se espeja la nueva política de transferir a la actividad privada servicios antes cumplidos por el Estado. La inversión real directa será en consecuencia, sólo algo más del 2 por ciento del total de la erogación de la administración nacional. Se advierte acá el propósito fiscalista de las privatizaciones; apuntan a reducir la erogación del Estado en servicios económicos, antes que a mejorarla e incrementarla.

La reducción en las erogaciones relativas a la deuda pública tiene su fundamento en dos conceptos; contracción de intereses y reprogramación de compromisos. La primera hipótesis en lo referido al endeudamiento con tasa de interés flotante, también resulta de inverificable cumplimiento, pues dependerá, en última instancia, de lo que ocurra en el cambiante panorama de las plazas financieras.

Aumenta defensa y seguridad en un 13,6 por ciento, aumento destinado exclusivamente a la mejora de sueldos proyectada. Seguridad Social, a pesar de las pésimas remuneraciones de los jubilados y pensionados, mantiene el constante sesgo ascendente de los últimos años, con un aumento del 1,9 por ciento, sobre su ya elevada ponderación. Ello implica mantener congelados los haberes del sector pasivo, condenado a la pauperización. También se dibuja un incremento del 20,1 por ciento el gasto en Educación, ello en cumplimiento de la Ley Federal de Educación que determina un aumento anual del veinte por ciento en ese concepto.

El cumplimiento de las pautas de gasto, dependerá, a su vez del flujo de ingresos. Se prevé un aumento de 5.800 millones de dólares con respecto a la ejecución estimada para 1983. Una hipótesis que se bifurca marcadamente de los datos aportados por los hechos. La recaudación real ejecutada de este año, será —y ello ya ha sido públicamente admitido— inferior a lo estimado en el documento presupuestario. La tendencia, a su vez, apunta negativamente, en línea con lo que pasa con el ritmo de actividad económica. En octubre la percepción de todos los impuestos y tributos, salvo sellos, de escasa gravitación sobre el total, resultó inferior a la de septiembre.

No obstante ello, el cálculo de recursos estima fuertes crecimientos, según ya se ha dicho, especialmente en el IVA, ganancias y las contribuciones a la Seguridad Social. Estos tres capítulos representan el 98 por ciento del aumento esperado.

En materia de IVA, se vaticina un salto del orden del 24 por ciento, la mitad explicable por el crecimiento del PBI, según la hipótesis macroeconómica que ya analizamos y, la otra mitad por mejora de la percepción. Implicaría ello, una recaudación promedio mensual de 1.076 millones de pesos, o sea unos trescientos millones más que lo obtenido en octubre. En ganancias se aguarda una expansión del 40 por ciento, originada exclusivamente en menor evasión. Se supone que sería el efecto, principalmente del pago de aportes previsionales personales a cuenta del gravamen. Un cálculo también inscripto en el panglosianismo de que hace gala la conducción económica y que difícil-

mente tenga correlato en la realidad, sobre todo teniendo en cuenta el comprometido cuadro de rentabilidad de las empresas.

Carecen, a su vez, de todo sustento las prospectivas tiradas en materia de contribuciones al sistema de Seguridad Social. Se pronostica un empujamiento de la recaudación del orden del 7,2 por ciento. Sería aportado por la moratoria previsional dispuesta para trabajadores autónomos y por el ingreso de un millón de nuevos contribuyentes llevaría la recaudación a 1.500 millones de dólares/año, es decir dos veces y media la cifra resultante de analizar los ingresos de septiembre.

También se estima crecimiento en impuestos internos, en este caso, de alrededor de 225 millones de pesos sobre la ejecución calculada para este año. O se el último, por qué entonces hacer anuncios especiales en septiembre. ¿De dónde saldrá esa suma si las ventas están en baja o al menos estancadas?

Volviendo sobre el capítulo previsional llama la atención que no haya referencia alguna relativa al anunciado recorte, de entre el 30 y el 70 por ciento en los aportes patronales. ¿Es un olvido, una omisión deliberada o el producto de que en el Palacio de Hacienda se estima que no se registrarán modificaciones en 1994, porque las provincias no cumplirán con la contraparte de eliminar ingresos brutos a los sectores productores de mercancías? En cualquiera de los tres casos representaría una ligereza indisoluble. De darse el último, porque entonces hacer anuncios especiales que generan expectativas e incluso pueden determinar decisiones empresarias, si no hay seguridad de su verificación en la realidad.

Resumiendo conceptos, estamos, entonces, ante un presupuesto de menguados objetivos que consagra la resignación por parte del Estado de su rol inductor y orientador del proceso económico, formulado según una hipótesis monetaria de problemático cumplimiento, pues descansa en la perdurabilidad de una ficción cambiaria cada día más débil y cuestionable y planteado según un cálculo de ingresos carente de razonabilidad y proyecciones de gastos que, al estar fundadas en la irrealidad de las percepciones, pueden resultar a la postre de imposible cumplimiento.

Es menester, por último, abordar la cuestión fundamental del cuadro estructural de las finanzas públicas. Nos encontramos con un Estado fuertemente endeudado y sin capacidad de repago. Como surge de las cifras respectivas de este presupuesto, el endeudamiento se paga con nuevo endeudamiento, ello en la mejor de las hipótesis. A pesar de la elevada presión tributaria y de la magnitud del gasto, la norma son las carencias. En Educación y Salud, tomando los valores del sector público consolidado para neutralizar los efectos de las transferencias de servicios desde la administración nacional a las provincias, los guarismos medidos en equivalencia del PBI, se mantienen en una meseta. Tal surge de la observación de una serie iniciada en 1980. De un PIB, cabe acotarlo, que en la relación por habitante es inferior —dejando de lado innovaciones de dudosa procedencia técnica— al de mediados de la década del sesenta. Es decir que en este marco los anuncios de mejoras, incluso el propio cumplimiento de la ampulosa

Ley Federal de Educación, resultan meramente ilusorios. La tendencia apunta por el contrario a la profundización del deterioro relativo, pues el avance de las exigencias y la transformación tecnológica requieren cada vez más unidades de capital por acto educativo o médico.

En Defensa, las partidas prácticamente se agotan en el gasto de personal y en los requerimientos administrativos corrientes. No quedan saldos para equipamiento y para la provisión logística, tal cual se desprende de los datos consignados en este documento, en tanto autorizadas y alarmadas voces ponen el acento en la creciente indefensión del país. Los recursos destinados a la infraestructura básica son suministrados con cuentagotas. Tomando el ejemplo de Vialidad, sólo se asignan 400 millones de pesos a la atención de los 27.000 kilómetros de la red carretera nacional no sujeta a concesión, de los cuales unos 9.000 kilómetros carecen aún de pavimento. Similares consideraciones podemos hacer en relación a otros capítulos esenciales, por caso el eléctrico. El Estado se desentiende del rol que le corresponde y las privatizaciones significan, en ese sentido, antes que un recurso para potenciar la inversión un mero expediente fiscalista con el agravante que deja

el poder de decisión en manos de un reducido y concentrado núcleo de grandes grupos económicos.

El presupuesto reproduce, con la fidelidad de un calco, los objetivos generales del modelo. Un Estado y una administración a la medida de una política que acentúa y agrava la desarticulación territorial. En ausencia de un Estado volcado al interés nacional y proyectado a la formación de una Nación para todos, perfilando una sociedad para sólo un tercio de la población, asentada en algunas porciones privilegiadas de la heredad territorial.

Un Estado solidario, eficiente, capaz de promover el interés nacional de acometer la tarea postergada de ocupar efectivamente toda la geografía argentina, sólo es posible en el contexto de una política de acelerado desarrollo de las fuerzas productivas que mediante el aprovechamiento pleno de nuestro rico catálogo de riquezas genere un mercado interno continuado y en expansión y una economía sólida, capaz de sustentar solventemente las finanzas públicas. Lo contrario equivale al contrasentido de suponer que puede levantarse un Estado sólido, eficiente y moderno, racionalmente concebido en una sociedad pobre, atrasada y desintegrada.

## 3

## INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MACHADO

Opinión del señor diputado acerca del artículo 33 del proyecto de ley sobre presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 1994.

Este artículo del presupuesto, al rescatar el Pacto Fiscal compulsivo, insiste en el argumento de que los estados provinciales deben profundizar el recorte de sus gastos.

La argumentación no es novedosa, se nos viene insistiendo, con el ademán admonitorio de un preceptor, sobre los deberes incumplidos por estos supuestos chicos díscolos que son las provincias. Un lenguaje por cierto impropio de un país federal como el que veníamos siendo.

Ese modo de presentar las cosas omite ciertos datos fundamentales: se está escondiendo la diferencia entre la naturaleza de los compromisos, y la responsabilidad de las provincias y del Estado nacional, se están escamoteando cifras que indican que las provincias cumplen actualmente más tareas, con menores recursos. A la luz de estos datos, quizás llegaríamos a la conclusión de que debieran ser los estados provinciales los que le reclamaran al Estado central el cumplimiento de una genuina racionalización de su quehacer, descendiendo del pupitre magistral.

Desde la vigencia de este plan económico, las provincias han visto descender su participación en los recursos en un 2,2 % del producto bruto interno. En números, es una disminución de 3.649,7 millones de pesos con respecto a lo que preveía la Ley de Coparticipación. Pero a la vez las provincias han visto aumentar la columna de sus egresos, porque se han hecho cargo de los servicios de educación, salud, acción social y transporte público transferidos por el Estado nacional. En suma, los estados provinciales están ha-

ciendo más que antes, con menores ingresos. ¿Puede el Estado central exhibir idéntica ejecutoria?

Cuando se reclama a las provincias por presuntos deberes no cumplidos, ¿se tiene en cuenta la incidencia de ellas dentro del sector público? ¿Se tienen presentes las características específicas del gasto provincial, enteramente distintas del que realiza el Estado nacional?

Las provincias representan en nuestra República una proporción importante y creciente del sector público global. Puede afirmarse que en nuestro país se da un alto grado de descentralización, a partir de diversos indicadores:

— Si excluimos los intereses internos y externos, la participación de las provincias llega en los últimos dos años al 45 % del gasto total.

— El empleo público provincial constituye el 55 % del empleo público total y el 9 % del empleo global del país.

— La tasa de inversión pública de las provincias es de alrededor del 20 % de la inversión global.

De estas consideraciones surge la importancia de los estados provinciales como estabilizadores económicos.

Pero no sólo atendamos a lo cuantitativo. Es en lo cualitativo donde las provincias y la Nación exhiben marcadas diferencias en la composición de sus gastos.

El gobierno nacional destina la mayor parte de su gasto a la seguridad social; mientras que las provincias atienden principalmente a otros gastos sociales, tales como salud y educación. Esto implica una distinción fundamental. En tanto el gobierno nacional concentra gastos en los que el Estado opera como agente de transferencia de ingresos, las provincias deben proveer servicios sociales en los que predomina su propio com-

**Cuadro Resumen de la Evolución Reciente del Gasto Público Provincial  
y Nacional sin Transferencias a Provincias**

(Millones de pesos de 1993)

Año	Provincias sin transferencia	Provincias con transferencia	Nación sin seguro social y transferencia	Nación con seguro social
1980	17.938			
1981	17.882			
1982	12.741			
1983	15.880			
1984	18.264			
1985	17.077			
1986	21.023			
1987	22.705			
1988	20.138			
1989	16.615			
1990	17.791			
1991	18.065	18.065	16.417	
1992	18.340	19.340	19.429	33.774
1993	20.174	22.274	21.060	39.650

4

**INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PARENTE**

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 1994.

La ley 24.061 sobre Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1993, estableció en su artículo 25 la transferencia a la jurisdicción de las respectivas provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la administración y financiamiento de los hospitales e institutos que dependen de la Nación, a cargo de su Ministerio de Salud y Acción Social, según detalle de su planilla anexa al artículo 25. Entre los centros de salud transferidos al ámbito provincial, se incluyó al Hospital Nacional "Fidanza", sito en Colonia Ensayo, departamento de Diamante, provincia de Entre Ríos, dedicado a combatir el mal de Hansen o lepra.

La ley 24.049, en su capítulo IV, instituyó normas de financiamiento, para asistir la transferencia de los citados establecimientos, disponiendo en su artículo 16 que al momento de efectivizarse la transferencia de los servicios prevista en el artículo 14, se transferirán en las proporciones correspondientes los recursos afectados según el párrafo primero de dicho artículo a la

respectiva provincia y hasta los montos mencionados en el mismo.

Por su parte, en el mensaje de elevación del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 1993 (luego ley 24.191), se expresaba: "...Otro aspecto saliente de la relación fiscal Nación - provincias es la vigencia del esquema de transferencia de servicios de salud y educación y programas asistenciales de la órbita nacional a la provincial... A la vigencia de la ley 24.049 y normas reglamentarias que establecieron un esquema de financiamiento transitorio de los servicios transferidos (mediante la afectación de coparticipación federal de impuestos y transferencias de fondos desde los Ministerios de Salud y Acción Social y de Educación de la Nación), se sucedieron convenios que efectivizaron las transferencias definitivas..." (Trámite Parlamentario Nº 97 del 14 de septiembre de 1992, página 4230). En el contexto de lo expresado, sin embargo, el artículo 36 de la citada norma 24.191, excluye de transferencia a jurisdicción provincial al Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer", Buenos Aires, destinado a la atención de la enfermedad de lepra.

Esta circunstancia motivó nuestra decidida crítica, dado el procedimiento informal que permitió la permanencia del citado nosocomio en jurisdicción nacional, en el lapso 1992/1993, y, por sobre todo, en cuanto consideramos que resulta imprescindible la subsistencia conjunta de los hospitales "Sommer" y "Fidanza" en el ámbito nacional, actuando este último como coordinador de la acción nacional con los programas provinciales existentes, formando personal especializado, impulsando la investigación de los métodos de tratamiento y diagnóstico y concurriendo en apoyo sanitario a las provincias.

Nuestras observaciones fueron formuladas en ocasión de la sanción por esta Honorable Cámara de la ley 24.191 (presupuesto nacional para 1993), así como en el proyecto de resolución por el que se solicitaba informes al Poder Ejecutivo en torno a la situación presupuestaria del Hospital "Fidanza" (expediente 633-D-90, Trámite Parlamentario Nº 16), y se repiten en esta oportunidad.

La situación del Hospital "Fidanza" es seriamente preocupante pelagra su propia existencia por falta de

recursos provinciales suficientes para su normal funcionamiento y, con ello, se produce el deterioro de un sistema de prevención y control de la enfermedad, diseñado en el conjunto de nuestro territorio nacional a partir de la atención experimentada y altamente calificada del personal de los hospitales "Sommer" y "Fidanza".

Reiteramos pues, nuestra petición de que el Hospital "Fidanza" reingrese al ámbito del Estado nacional, con un tratamiento en relación a su importancia, similar al del "Baldomero Sommer".

La oportunidad para rever lo solicitado es indudablemente la del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto nacional para 1994, entre cuyas previsiones se encuentran nuevamente las partidas presupuestarias para el Hospital "Sommer".

Sin más, dejamos expresada nuestra opinión y petitionado lo que creemos justo, lógico y razonable en defensa de un sistema nacional de salud altamente perjudicado por decisiones inadecuadas y como conocedores de la realidad económica de la provincia de Entre Ríos.

## 5

### INSERCIÓN SOLICITADA POR LOS SEÑORES DIPUTADOS CAMAÑO (G.) DURRIEU Y CORCHUELO BLASCO

#### Consideraciones acerca de los presupuestos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en razón de leyes vigentes, debe cubrir las necesidades de ciertos sectores de la población que, por diversas razones, no han contribuido al sistema con los aportes que les hubiera correspondido, por lo cual el instituto se ha visto imposibilitado de efectuar las provisiones correspondientes por carecer de dichos importes.

Se trata de los distintos tipos de pensiones no contributivas que hoy se otorgan en virtud de la legislación vigente. Ellos son:

1. Pensionados por vejez/invalidez.
2. Madres de 7 o más hijos o más.
3. Excombatientes.
4. Familiares de desaparecidos.
5. Otras leyes especiales.
6. Hemodializados.
7. Discapacitados.

Todo esto implica una carga importante para las finanzas del instituto; más aún si se tiene en cuenta que en su mayoría se trata de una población de riesgo, lo cual implica un nivel de consumo muy superior a la media.

Analicemos numéricamente cuál es la carga a la que hago referencia.

Actualmente se encuentran afiliados 147.724 beneficiarios de pensiones no contributivas que, con los familiares a cargo, ascienden a 251.883. Esto implica un gasto anual básico de \$ 149.550.493, gasto por el cual el instituto no recibe aporte alguno.

De las 9.200 pensiones otorgadas a madres de 7 o más hijos se han afiliado 3.898 madres más sus 17.566 hijos, lo que supone un incremento ya efectivizado en el gasto de \$ 12.717.364. Pero de estas pensiones, en sus diferentes variantes, una inmensa mayoría se encuentra en trámite aún sin concluir, por lo cual las que están pendientes sumarán también el gasto una vez que se incorporen al sistema.

En cuanto a las madres prolíferas sólo han sido satisfechas el 18,62 % de las solicitudes presentadas hasta el momento (49.365), y de éstas sólo han concluido su trámite de afiliación al instituto el 7,9 %. De resultar positivo el 50 % de los trámites pendientes y teniendo en cuenta la relación de la cantidad de hijos similar a la actual, esto supondría una erogación para el instituto de \$ 62.804.725 anuales.

De acuerdo con los resultados del censo de población del año 1991, la población de más de 60 años ha tenido un aumento del 27,2 % en relación al censo anterior, y la de más de 80 años, del 43,98 %; en tanto que el resto de la población ha crecido un 16,7 %, por lo cual es esperable un aumento proporcional en el grupo de afiliados que se acogen al beneficio por tener 70 o más años. Actualmente existen 34.655 beneficiarios con 69.284 personas a cargo.

La demanda para los grupos de excombatientes y de familiares de desaparecidos tenderá, en cambio, a desaparecer, aunque dada la edad de los mismos el instituto deberá realizar su cobertura por un largo período, especialmente en el caso de los excombatientes con un nivel de requerimiento alto de prestaciones.

Respecto de los veteranos de guerra hoy se cubren efectivamente 5.537 beneficiarios con 11.416 personas a cargo, con un gasto anual de \$10.053.136. En este grupo se encuentran pendientes 4.000 trámites de afiliación al que aplicándole la misma relación familiar-beneficiario que la actual supondría un gasto adicional anual de \$7.218.121.

Las personas con insuficiencia renal crónica que deben hemodializarse son beneficiarias del INSSJP, hayan o no realizado aportes; el gasto sólo de este tipo de prestación es anualmente de \$77.054.220. A esto debe sumarse el resto de las prestaciones que se las practica, considerando que este grupo tiene un alto nivel de consumo por las complicaciones de su patología de base.

La cobertura de los discapacitados insume solamente en colegios diferenciales un gasto anual de \$25.433.592.

Es importante destacar que la cobertura que realiza el instituto a sus afiliados no es solamente asistencial sino, y en gran medida, de tipo social.

Por lo tanto las erogaciones que el instituto realiza para cubrir esta franja de la población le significan el siguiente gasto anual:

Ya pensionados .....	150.000.000
Madres de 7 o más hijos .....	13.000.000
Excombatientes .....	10.100.000
Discapacitados .....	25.000.000
Hemodializados .....	77.100.000
<b>TOTAL .....</b>	<b>275.200.000</b>

Agregando a ello los trámites pendientes, significaría:

Pensiones en trámite .....	172.000.000
Madres de 7 o más hijos .....	63.000.000
Excombatientes .....	7.200.000
<b>TOTAL .....</b>	<b>242.200.000</b>

Los ingresos previstos en 1994 para el INSSJP se mantienen en los mismos niveles que el año anterior, por lo que este aumento en los gastos, de no contar con un aporte equivalente, sólo podrá ser cubierto con una disminución en la calidad y en la cantidad de las prestaciones que actualmente realiza el instituto. Esto no sólo afectará al grupo de beneficiarios sino que tendrá incidencia negativa sobre los derechos de los jubilados y pensionados del país que a lo largo de toda su vida de trabajo hicieron sus aportes para poder contar con el mejor servicio. Además estaríamos agravando una delicada situación que ya viven nuestros mayores, con escasos ingresos y prolongadas postergaciones.

Por lo expuesto es que solicito la incorporación al presupuesto de 1994 de una partida de \$517.400.000 destinada al Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados a fin de que el instituto pueda cubrir con este aporte los gastos que implica esta cobertura.

El Congreso de la Nación ha sido sensible a la necesidad de la gente que por diversas circunstancias se encontró en inferioridad de condiciones (excombatientes de Malvinas, madres de 7 o más hijos, familiares de desaparecidos, discapacitados, personas de 70 años, etcétera) y atento a ello decidió protegerla brindándole un beneficio, cual es un ingreso mensual mínimo y la posibilidad de contar con una cobertura asistencial y social. Considero que ha sido sabio en su decisión y, sobre todo, justo. Pero es imprescindible que sea consecuente en su accionar, por lo que no puede dejar de tener en cuenta, al considerar el presupuesto, estos gastos que debe afrontar el INSSJP y para los cuales no cuenta con aporte alguno que pueda cubrirlo, salvo lo que este Congreso le otorgue en este rubro.

A N E X O

ESTADISTICO PADRON ACTUALIZADO AL 30-9-93

DISTRIBUCION DE BENEFICIARIOS POR EDAD, SEXO Y CONDICION DE AFILIACION DE TODO EL PAIS

Intervalos de edad	JUBILADOS			PENSIONADOS			FAMILIARES A CARGO						Total por intervalo			
	Tot. masc.	Tot. fem.	Total	Tot. masc.	Tot. fem.	Total	CONYUGE		HIJOS		OTROS					
							Total masc.	Total fem.	Total masc.	Total fem.	Total masc.	Total fem.		Total		
HASTA 14	0	0	0	1.782	1.446	3.228	0	0	0	23.505	23.137	45.802	1.262	1.159	2.421	52.451
15	0	0	0	242	217	459	0	0	0	2.022	2.074	4.096	115	99	214	4.769
16	0	0	0	286	228	514	0	1	1	2.095	2.009	4.104	102	105	208	4.827
17	0	0	0	297	287	584	0	4	4	1.675	1.904	3.779	109	118	227	4.594
18	0	0	0	329	238	567	6	17	23	1.810	1.854	3.664	84	82	166	4.420
19	0	0	0	328	282	590	3	27	30	1.611	1.643	3.259	80	67	147	4.026
20 A 24	0	0	0	1.679	1.455	3.134	44	656	700	1.390	1.673	3.063	58	73	131	7.028
25 A 29	0	0	0	2.356	1.836	4.192	154	2.083	2.237	100	82	182	8	9	17	6.628
30 A 34	0	0	0	7.051	2.935	9.987	330	1.504	1.834	72	48	120	10	40	50	1.991
35 A 39	0	0	0	2.472	3.926	6.398	685	992	1.677	73	69	142	14	51	65	8.282
40 A 44	0	0	0	2.393	4.600	6.993	985	1.105	2.100	59	50	109	22	111	133	9.335
45 A 49	0	0	0	2.481	4.977	7.458	1.133	1.273	2.406	39	43	87	25	119	144	9.095
50 A 54	0	0	0	2.387	5.705	8.092	1.240	1.600	2.840	40	44	84	31	163	194	1.710
55 A 59	0	0	0	3.514	6.372	10.486	1.305	1.866	3.171	20	29	49	44	194	238	3.944
60 A 64	0	0	0	4.909	8.860	13.769	1.380	2.167	3.547	21	22	43	116	300	416	7.775
65 A 69	0	0	0	5.844	9.794	15.638	1.070	1.989	3.059	7	24	31	135	313	448	9.176
70 A 74	0	0	0	6.460	10.081	16.541	648	1.609	2.257	3	10	13	72	253	325	9.136
75 A 79	0	0	0	5.881	8.827	14.708	372	932	1.304	1	2	3	45	169	214	6.229
80 A 84	0	0	0	4.155	7.240	11.395	173	549	722	0	0	0	41	121	162	2.279
85 A 89	0	0	0	2.489	4.910	7.399	95	192	287	0	0	0	24	93	117	7.803
90 Y MAS	0	0	0	1.358	3.734	5.092	27	60	87	150	4	154	13	39	52	5.385
TOTALES GENERALES	0	0	0	59.193	88.531	147.724	9.660	18.626	26.286	34.993	34.791	69.784	2.410	3.679	6.089	251.683

Total de beneficiarios de todo el país: 251.883

REGISTRADOS CON FECHA DE NACIMIENTO ERRONEA 0



## ANEXO II

BENEFICIARIOS TITULARES DE EX CAJA 40  
CUYO NUMERO DE AFILIADO COMIENZA CON 7

Delegación	Cantidad de casos	Cantidad de hijos
Tucumán .....	39	123
Corrientes .....	37	101
Córdoba .....	251	755
Bahía Blanca .....	13	43
Capital Federal .....	129	496
La Plata .....	28	172
San Martín .....	271	1.330
Rosario .....	103	357
Lanús .....	613	3.246
Mar del Plata .....	18	87
Salta .....	19	121
Chaco .....	215	989
Entre Ríos .....	106	476

Delegación	Cantidad de casos	Cantidad de hijos
Santa Fe .....	38	159
Neuquén .....	11	61
Chubut .....	6	33
Misiones .....	467	2.051
La Pampa .....	70	53
San Juan .....	30	177
Jujuy .....	10	52
Formosa .....	192	982
Catamarca .....	298	1.440
La Rioja .....	116	498
San Luis .....	6	20
Río Negro .....	25	100
Santa Cruz .....	1	7
Morón .....	302	1.496
Azul .....	31	136
Junín .....	142	657
Luján .....	61	304
TOTAL GENERAL	3.898	17.566

## CUADRO 1

## MADRES CON MAS DE SIETE HIJOS

Costo promedio por beneficiario y por delegación regional

	Beneficiarios totales	Gasto anual	Gasto por beneficiario	Distribución pensiones ya otorgadas	Cantidad de madres	Población cubierta (**)	Gasto actual
I Tucumán .....	109.059	64.642.917	592,73	0,75	39	123	96.023
II Corrientes .....	60.394	35.788.466	592,58	0,64	37	101	81.776
III Córdoba .....	356.615	211.375.630	592,73	4,69	251	755	596.284
IV Mendoza .....	142.602	84.550.252	592,91	0,00	0	0	0
V Bahía Blanca .....	90.889	53.906.378	593,10	0,23	13	43	33.214
VI Capital Federal ..	486.523	28.320.833	592,62	2,91	129	496	370.384
VII La Plata .....	97.735	57.932.580	592,75	0,93	28	172	118.550
VIII San Martín .....	278.381	165.074.301	592,98	7,46	271	1.330	949.361
IX Rosario .....	239.583	142.035.476	592,84	2,14	103	357	272.708
X Lanús .....	375.130	222.335.848	592,69	17,98	613	3.246	2.287.191
XI Mar del Plata .....	144.636	85.668.641	592,31	0,49	18	87	62.192
XII Salta .....	64.344	38.025.246	590,97	0,65	19	121	82.736
XIII Chaco .....	67.508	40.038.347	593,09	5,61	215	989	714.081
XIV Entre Ríos .....	126.787	75.155.779	592,77	2,71	106	476	344.993
XV Santa Fe .....	139.443	82.537.151	591,91	0,89	38	152	112.462
XVI Neuquén .....	22.877	13.644.353	596,42	0,34	11	61	42.942
XIX Sgo. del Estero ..	77.603	46.077.651	593,76	6,31	310	1.044	803.953
XX La Pampa .....	32.931	19.459.979	590,93	0,29	10	53	37.229
XXI San Juan .....	53.604	31.762.264	592,54	0,96	30	177	122.655
XXII Jujuy .....	40.778	24.157.215	592,41	0,29	10	52	36.729
XXIII Formosa .....	19.236	11.407.574	593,03	5,47	192	982	696.220
XXIV Catamarca .....	24.541	14.539.064	592,44	8,10	298	1.440	1.029.660
XXV La Rioja .....	20.367	12.078.607	593,05	2,86	116	498	364.131
XXVI San Luis .....	23.556	15.657.454	593,60	0,12	6	20	15.330
XXVII Chubut .....	28.179	16.775.844	595,33	0,18	6	33	23.218
XXVIII Río Negro .....	36.323	21.473.080	591,17	0,58	25	100	73.896
XXIX Misiones .....	56.896	33.775.365	593,63	11,74	467	2.051	1.494.769
XXX Santa Cruz .....	10.567	6.262.982	592,69	0,04	1	7	4.742
XXXI Morón .....	251.955	149.416.847	593,03	8,38	302	1.496	1.066.268
XXXII Azul .....	53.127	31.538.586	593,65	0,78	31	136	99.139
XXXIII Junín .....	145.378	85.892.319	590,82	3,72	142	657	472.066
XXXIV Luján .....	91.910	54.577.411	593,81	1,70	61	304	216.742
XXXV Tierra del Fuego	1.430	894.712	625,67	0,00	0	0	0
TOTALES .....	3.773.887	2.236.779.151	593,73	100,00	3.898	17.559	12.721.644

(\*\*) Consideramos sólo la cantidad de hijos afiliados.

## CUADRO 4

BENEFICIARIOS POR TENER MAS DE 70 AÑOS  
Costo promedio por beneficiario y por delegación regional

	Benefi- ciarios totales	Gasto anual	Gasto por benefi- ciario	Distri- bución de la población actual	Cantidad de afiliados	Población cubierta (**)	Gasto actual
I Tucumán .....	109.059	64.642.917	592,73	2,89	1.001	2.003	1.187.211
II Corrientes .....	60.394	35.788.466	592,58	1,60	555	1.109	657.280
III Córdoba .....	356.615	211.375.630	592,73	9,45	3.275	6.549	3.882.057
IV Mendoza .....	142.602	84.550.252	592,91	3,78	1.309	2.619	1.552.823
V Bahía Blanca ..	90.889	53.906.378	593,10	2,41	835	1.669	990.027
VI Capital Federal	486.523	288.320.833	592,62	12,89	4.468	8.935	5.295.208
VII La Plata .....	97.735	57.932.580	592,75	2,59	897	1.795	1.063.971
VIII San Martín ...	278.381	165.074.301	592,98	7,38	2.556	5.113	3.031.702
IX Rosario .....	239.583	142.035.476	592,84	6,35	2.200	4.400	2.608.578
X Lanús .....	375.130	222.335.848	592,69	9,94	3.445	6.890	4.083.349
XI Mar del Plata ..	144.636	85.668.641	592,31	3,83	1.328	2.656	1.573.363
XII Salta .....	64.344	38.025.246	590,97	1,70	591	1.182	698.359
XIII Chaco .....	67.508	40.038.347	593,09	1,79	620	1.240	735.331
XIV Entre Ríos ...	126.787	75.155.779	592,77	3,36	1.164	2.329	1.380.287
XVI Neuquén .....	22.877	13.644.353	596,42	0,61	210	420	250.588
XIX Sgo. del Estero	77.603	46.077.651	593,76	2,06	713	1.425	846.247
XX La Pampa .....	32.931	19.459.979	590,93	0,87	302	605	357.396
XXI San Juan .....	53.604	31.762.264	592,54	1,42	492	984	583.336
XXII Jujuy .....	40.778	24.157.215	592,41	1,08	374	749	443.664
XXIII Formosa .....	19.236	11.407.574	593,03	0,51	177	353	209.508
XXIV Catamarca ...	24.541	14.539.064	592,44	0,65	225	451	267.020
XXV La Rioja .....	20.367	12.078.607	593,05	0,54	187	374	221.832
XV Santa Fe .....	139.443	82.537.151	591,91	3,69	1.280	2.561	1.515.851
XXVI San Luis .....	26.556	15.657.454	589,60	0,70	244	488	287.560
XVII Chubut .....	28.179	16.775.844	595,33	0,75	259	518	308.100
XXVII Río Negro ...	36.323	21.473.080	591,17	0,96	334	667	394.368
XXVIII Misiones .....	56.896	33.775.365	593,63	1,51	522	1.045	620.308
XXVIII Santa Cruz ...	10.567	6.262.982	592,69	0,28	97	194	115.024
XXIX Morón .....	251.955	149.416.847	593,03	6,68	2.314	4.627	2.744.142
XXX Azul .....	53.127	31.538.586	593,65	1,41	488	976	579.228
XXXI Junín .....	145.378	85.892.319	590,82	3,85	1.335	2.670	1.577.471
XXXII Luján .....	91.910	54.577.411	593,81	2,44	844	1.688	1.002.351
XXXIII Tierra del Fuego	1.430	894.712	625,67	0,04			
TOTALES .....	3.773.887	2.236.779.151	593,73	100	34.655	69.284	41.063.538

(\*\*) Se considera 1 familiar por afiliado ya que cubre al cónyuge.

## CUADRO 5

PENSIONES YA OTORGADAS A VETERANOS DE GUERRA  
Costo promedio por beneficiario y por delegación regional

	Benefi- ciarios totales	Gasto anual	Gasto por benefi- ciario	Distri- bución pensiones ya otorgadas	Cantidad de benefi- ciarios	Familiares carga (*)	Gasto actual
I Tucumán .....	109.059	64.642.917	592,73	1,70	96	193	171.300
II Corrientes .....	60.394	35.788.466	592,58	11,56	610	1.349	1.160.870
III Córdoba .....	856.615	211.375.630	592,73	13,40	756	1.515	1.346.085
IV Mendoza .....	142.602	84.550.252	592,91	0,00	26	68	55.734
V Bahía Blanca ..	90.889	53.906.378	593,10	0,81	52	86	81.848
VI Capital Federal	486.523	288.320.083	592,62	3,69	263	362	870.384
VII La Plata .....	97.735	57.932.580	592,75	4,49	274	487	451.084
VIII San Martín .....	278.381	165.074.301	592,98	5,53	330	808	556.215
IX Rosario .....	239.583	142.035.476	592,84	2,94	160	338	295.237
X Lanús .....	375.130	222.335.848	592,69	8,45	480	953	849.325
XI Mar del Plata ..	144.636	85.668.641	592,31	3,33	189	375	334.060
XII Salta .....	64.344	38.025.246	590,97	1,12	58	132	112.284
XIII Chaco .....	67.508	40.038.347	593,09	13,05	654	1.559	1.312.509
XIV Entre Ríos .....	126.787	75.155.779	592,77	1,04	53	123	104.328
XVI Neuquén .....	22.877	13.644.353	596,42	0,31	20	33	81.610
XIX Sgo. del Estero	77.603	46.077.651	593,76	1,72	90	201	172.785
XX La Pampa .....	32.931	19.459.979	590,93	0,40	25	43	40.183
XXI San Juan .....	53.604	31.762.264	592,54	0,16	8	19	15.998
XXII Jujuy .....	40.778	24.157.215	592,41	0,29	21	28	29.028
XXIII Formosa .....	19.236	11.407.574	593,03	0,77	36	94	77.094
XXIV Catamarca .....	24.541	14.539.064	592,44	0,31	15	38	31.399
XXV La Rioja .....	20.647	12.078.607	593,05	0,08	5	9	8.303
XV Santa Fe .....	139.443	82.537.151	591,91	1,60	85	196	166.326
XXVI San Luis .....	26.556	15.657.454	589,60	0,22	14	24	22.405
XVII Chubut .....	28.179	16.775.844	595,33	4,12	222	477	416.137
XXVII Río Negro .....	36.323	21.473.080	591,17	0,84	41	102	84.537
XVIII Misiones .....	56.896	33.775.365	593,63	2,01	102	239	202.429
XXVIII Santa Cruz .....	10.567	6.262.982	592,69	0,29	17	32	29.042
XXIX Morón .....	251.955	149.416.847	593,03	7,80	444	878	783.986
XXX Azul .....	53.127	31.538.586	593,65	0,52	30	58	52.241
XXXI Junín .....	145.378	85.892.319	590,82	1,32	68	155	131.753
XXXII Luján .....	91.910	54.577.411	593,81	5,26	277	614	529.088
XXXIII Tierra del Fuego	1.430	894.712	625,67	0,26	16	28	27.530
TOTALES .....	3.773.887	2.236.779.151	593,73	99,00	5.537	11.416	10.053.136

(\*) Consideramos sólo la cantidad de familiares a cargo afiliados.

## CUADRO 2

## PENSIONES SOLICITADAS Y NO OTORGADAS

Costo promedio por beneficiario y por delegación regional

	Benefi- ciarios totales	Gasto anual	Gasto por benefi- ciario	Distribución de pensiones ya otorgadas	Cantidad de madres	Población cubierta (**)	Gasto eventual
I Tucumán	109.059	64.642.917	592,73	0,75	151	649	474.209
II Corrientes	60.394	35.788.466	592,58	0,64	129	553	403.853
III Córdoba	356.615	211.375.630	592,73	4,69	937	4.031	2.944.750
IV Mendoza	142.602	84.550.252	592,91	0,00	0	0	0
V Bahía Blanca	90.889	53.906.378	593,10	0,26	52	224	164.026
VI Capital Federal	486.523	288.320.833	592,62	2,91	582	2.504	1.829.144
VII La Plata	97.735	57.932.580	592,75	0,93	186	801	585.461
VIII San Martín	278.381	165.074.301	592,98	7,46	1.492	6.415	4.688.419
IX Rosario	239.583	142.035.476	592,84	2,14	429	1.843	1.346.771
X Lanús	375.130	222.335.848	592,69	17,98	3.596	15.462	11.295.298
XI Mar del Plata	144.636	85.668.641	592,31	0,49	98	421	307.135
XII Salta	64.344	38.025.246	590,97	0,65	130	561	408.590
XIII Chaco	67.508	40.038.347	593,09	5,61	1.122	4.824	3.526.489
XIV Entre Ríos	126.787	75.155.779	592,77	2,71	542	2.332	1.703.750
XVI Neuquén	22.877	13.644.352	596,42	0,92	184	789	580.250
XIX Sgo. del Estero	77.603	46.077.651	593,76	0,34	67	288	211.125
XX La Pampa	32.931	19.459.979	590,93	0,18	36	156	113.814
XXI San Juan	53.604	31.762.264	592,54	11,73	2.346	10.089	7.368.264
XXII Jujuy	40.778	24.157.215	592,41	6,31	1.262	5.425	3.961.273
XXIII Formosa	19.236	11.407.574	593,03	0,29	59	252	184.508
XXIV Catamarca	24.541	14.539.064	592,44	0,96	193	829	605.633
XXV La Rioja	20.367	12.078.607	593,05	0,29	58	248	181.584
XV Santa Fe	139.443	82.537.151	591,91	5,47	1.094	4.704	3.431.753
XXVI San Luis	26.556	15.657.454	589,60	8,10	1.619	6.964	5.060.617
XVII Chubut	28.179	16.775.844	595,33	2,86	572	2.460	1.805.188
XXVII Río Negro	86.323	21.473.080	591,17	0,12	24	104	75.907
XXVIII Misiones	56.896	33.775.365	593,63	0,58	116	501	366.457
XXVIII Santa Cruz	10.567	6.262.982	592,69	0,04	7	32	23.416
XXIX Morón	251.955	149.416.847	593,03	8,38	1.675	7.204	5.265.765
XXX Azul	53.127	31.538.586	593,65	0,78	156	669	489.597
XXXI Junín	145.378	85.892.319	590,82	3,72	745	3.201	2.331.297
XXXII Luján	91.910	54.577.411	593,81	1,70	340	1.462	1.070.381
XXXIII Tierra del Fuego	1.430	894.712	625,67	0	0	0	
TOTALES	3.773.887	2.236.779.151	593,73	100	20.000	86.000	62.804.725

(\*\*) Consideramos 4,03 hijos por madre que es la misma relación actual, y la misma distribución.

## CUADRO 3

## TRAMITES PENDIENTES EN SERVICIO SOCIAL

Costo promedio por beneficiario y por delegación regional

	Benefi- ciarios totales	Gasto anual	Gasto por benefi- ciario	Distri- bución de la población actual	Cantidad de afiliados	Población cubierta (**)	Gasto eventual
I Tucumán .....	109.059	64.642.817	592,73	2,89	3.352	8.381	4.967.411
II Corrientes .....	60.394	35.788.466	592,58	1,60	1.856	4.641	2.750.123
III Córdoba .....	356.615	211.375.630	592,73	9,45	10.961	27.404	16.242.917
IV Mendoza .....	142.602	84.550.252	592,91	3,78	4.383	10.958	6.497.167
V Bahía Blanca .....	90.889	53.906.378	593,10	2,41	2.794	6.984	4.142.373
VI Capital Federal .....	486.523	288.320.833	592,62	12,89	14.955	37.386	22.155.682
VII La Plata .....	97.735	57.932.580	592,75	2,59	3.004	7.510	4.451.762
VIII San Martín .....	278.381	165.074.301	592,84	6,35	7.364	18.410	10.914.553
IX Rosario .....	239.583	142.035.476	592,98	7,38	8.557	21.392	12.684.945
X Lanús .....	375.130	222.335.848	592,69	9,94	11.531	28.826	17.085.142
XI Mar del Plata .....	144.636	85.668.641	592,31	3,83	4.446	11.114	6.583.108
XII Salta .....	64.344	38.025.246	590,97	1,70	1.978	4.944	2.922.006
XIII Chaco .....	67.508	40.038.347	593,09	1,79	2.075	5.188	3.076.701
XIV Entre Ríos .....	126.787	75.155.779	592,77	3,36	3.897	9.743	5.775.259
XV Santa Fe .....	139.443	82.537.151	596,42	0,61	703	1.758	1.048.485
XVI Neuquén .....	22.877	13.644.353	593,76	2,06	2.385	5.963	3.540.784
XIX Sgo. del Estero .....	77.603	46.077.651	590,93	0,87	1.012	2.531	1.495.360
XX La Pampa .....	32.931	19.459.979	592,54	1,42	1.648	4.119	2.440.735
XXI San Juan .....	53.604	31.762.264	592,41	1,08	1.253	3.134	1.856.333
XXII Jujuy .....	40.778	24.157.215	593,03	0,51	591	1.478	876.602
XXIII Formosa .....	19.236	11.407.574	592,44	0,65	754	1.886	1.117.238
XXIV Catamarca .....	24.541	14.539.064	593,05	0,54	626	1.565	928.167
XXV La Rioja .....	20.367	12.078.697	591,91	3,69	4.286	10.713	6.342.472
XXVI San Luis .....	26.556	15.657.454	589,60	0,70	816	2.041	1.302.179
XVII Chubut .....	28.179	16.775.844	595,33	0,75	866	2.165	1.289.120
XXVII Río Negro .....	36.323	21.473.080	591,17	0,96	1.116	2.791	1.650.074
XVIII Misiones .....	56.896	33.775.365	593,63	1,51	1.749	4.372	2.595.429
XXVIII Santa Cruz .....	10.567	6.262.982	592,69	0,28	325	812	481.272
XXIX Morón .....	251.955	149.416.847	593,03	6,68	7.744	19.361	11.481.766
XXX Azul .....	53.127	31.538.586	593,65	1,41	1.633	4.082	2.423.546
XXXI Junín .....	145.378	85.892.319	590,82	3,85	4.469	11.171	6.600.296
XXXII Luján .....	91.910	54.577.411	593,81	2,44	2.825	7.063	4.193.938
XXXIII Tierra del Fuego	1.430	894.712	625,67	0,04	44	110	68.753
<b>TOTALES .....</b>	<b>3.773.887</b>	<b>2.236.779.151</b>	<b>593,73</b>	<b>100,00</b>	<b>116.000</b>	<b>290.000</b>	<b>171.882.718</b>

(\*\*) Se considera 1,5 familiares por afiliado.

CUADRO 3  
VETERANOS DE GUERRA SIN COMPLETAR AFILIACION  
Costo promedio por beneficiario y por delegación regional

	Benefi- ciarios totales	Gasto anual	Gasto por benefi- ciario	Distribu- ción pen- siones ya otorgadas	Cantidad de benefi- ciarios	Familiares a cargo (%)	Gasto eventual
I Tucumán	109.059	64.642.917	592,73	1,70	68	140	123.678
II Corrientes	60.394	35.788.466	592,58	11,56	462	952	838.144
III Córdoba	356.615	211.375.630	592,73	13,40	536	1.104	971.868
IV Mendoza	142.602	84.550.252	592,91	0,00	0	0	0
V Bahía Blanca	90.889	53.906.378	593,10	0,31	33	67	59.094
VI Capital Federal	486.523	288.320.833	592,62	3,69	147	304	267.416
VII La Plata	97.735	57.932.580	592,75	4,49	180	370	325.681
VIII San Martín	278.381	165.074.301	592,98	5,53	221	456	401.585
IX Rosario	239.583	142.035.476	592,84	2,94	118	242	213.160
X Lanús	375.130	222.335.848	592,69	8,45	338	697	613.209
XI Mar del Plata	144.636	85.668.641	592,31	3,33	133	274	241.190
XII Salta	64.344	38.025.246	590,97	1,12	45	92	81.069
XIII Chaco	67.508	40.038.347	593,09	13,05	522	1.076	947.626
XIV Entre Ríos	120.787	75.155.779	592,77	1,04	42	86	75.324
XVI Neuquén	22.877	13.644.353	596,42	0,31	13	26	22.823
XIX Sgo. del Estero	77.603	46.077.651	593,76	1,72	69	141	124.750
XX La Pampa	32.931	19.459.979	590,93	0,40	16	33	29.012
XXI San Juan	53.604	31.762.264	592,54	0,16	6	13	11.551
XXII Jujuy	40.778	24.157.215	592,41	0,29	12	24	20.958
XXIII Formosa	19.236	11.407.574	593,03	0,77	31	63	55.362
XXIV Catamarca	24.541	14.539.064	592,44	0,31	13	26	22.670
XXV La Rioja	20.367	12.078.607	593,05	0,08	3	7	5.994
XV Santa Fe	139.443	82.537.151	591,91	1,66	66	137	120.086
XXVI San Luis	26.556	15.657.454	589,60	0,22	9	18	16.176
XXVII Chubut	28.179	16.775.844	593,33	4,12	165	340	300.449
XXVII Río Negro	36.323	21.473.080	591,17	0,84	34	70	61.036
XXVIII Misiones	56.896	33.775.365	593,63	2,01	80	166	146.153
XXVIII Santa Cruz	10.567	6.262.982	592,69	0,29	12	24	20.968
XXIX Morón	251.955	149.416.847	593,03	7,80	312	643	566.034
XXX Azul	53.127	31.538.580	593,65	0,52	21	43	37.718
XXXI Junín	145.378	85.892.319	590,82	1,32	53	108	95.125
XXXII Luján	91.910	54.577.411	593,81	5,26	210	433	381.999
XXXIII Tierra del Fuego	1.430	894.712	623,67	0,26	10	21	19.911
TOTALES	3.773.887	2.236.779.151	593,73	99,00	4.000	8.194	7.218.121

(\*\*) Se consideraron igual cantidad de familiares a cargo que la relación actual.

## ANEXO III

BENEFICIARIAS TITULARES DE EX CAJA 40  
(VETERANOS DE GUERRA)

Delegación	Cantidad de titulares	Familiares a cargo
Azul .....	30	58
Bahía Blanca .....	52	86
Capital .....	263	362
Catamarca .....	15	38
Chaco .....	654	1.559
Chubut .....	222	477
Córdoba .....	756	1.515
Corrientes .....	610	1.349
Entre Ríos .....	53	123
Formosa .....	36	94
Jujuy .....	21	28
Junín .....	68	155
La Pampa .....	25	43
La Plata .....	274	487
La Rioja .....	5	9

Delegación	Cantidad de titulares	Familiares a cargo
Lanús .....	480	953
Luján .....	277	614
Mar del Plata .....	189	375
Mendoza .....	26	68
Misiones .....	102	239
Morón .....	444	878
Neuquén .....	20	33
Río Negro .....	41	102
Rosario .....	160	338
Salta .....	58	132
San Juan .....	8	19
San Luis .....	14	24
San Martín .....	330	608
Santa Cruz .....	17	32
Santa Fe .....	85	196
Santiago del Estero ..	90	201
Tierra del Fuego .....	16	28
Tucumán .....	96	193
TOTAL GENERAL	5.537	11.416